



Asamblea General

Distr. general
8 de diciembre de 2020
Español
Original: inglés

Consejo de Derechos Humanos
Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones
Forzadas o Involuntarias

**Comunicaciones transmitidas, casos examinados,
observaciones y otras actividades realizadas por
el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones
Forzadas o Involuntarias***

122º período de sesiones (21 a 30 de septiembre de 2020)**

I. Comunicaciones

1. Entre el 16 de mayo y el 30 de septiembre de 2020, el Grupo de Trabajo, con arreglo a su procedimiento de acción urgente, transmitió 35 casos a: Belarús (1), Camerún (1), China (1), Egipto (8), Irán (República Islámica del) (2), Libia (1), Pakistán (12), Qatar (1), República Democrática Popular Lao (4), Rwanda (1), Venezuela (República Bolivariana de) (2) y Yemen (1).
2. En el período de sesiones, celebrado del 21 al 30 de septiembre de 2020, el Grupo de Trabajo decidió transmitir 224 nuevos casos denunciados de desaparición forzada a 16 Estados: Afganistán (9), Arabia Saudita (3), Bangladesh (2), China (52), Egipto (6), Federación de Rusia (23), India (9), Irán (República Islámica del) (4), Iraq (1), Líbano (1), Pakistán (37), República Árabe Siria (8), República Popular Democrática de Corea (12), Serbia (1) y Sri Lanka (56).
3. El Grupo de Trabajo también decidió transmitir 5 nuevos casos denunciados de vulneraciones equivalentes a actos de desaparición forzada supuestamente perpetrados por agentes no estatales en Libia (1) y el Yemen (4).
4. El Grupo de Trabajo dio por esclarecidos 223 casos en: China (6), Egipto (37), Emiratos Árabes Unidos (1), Federación de Rusia (1), Filipinas (1), Pakistán (1), República Árabe Siria (1) y Turquía (2). Un total de 206 casos se dieron por esclarecidos sobre la base de la información proporcionada por los Gobiernos, y 19 sobre la base de la información facilitada por las fuentes.
5. Entre el 16 de mayo y el 30 de septiembre de 2020, el Grupo de Trabajo transmitió 43 comunicaciones junto con otros mecanismos de procedimientos especiales. Las

* Los anexos del presente documento se reproducen tal como se recibieron, únicamente en el idioma en que se presentaron.

** En vista de las restricciones a los viajes impuestas por la pandemia de enfermedad por coronavirus (COVID-19), el Grupo de Trabajo decidió reunirse a distancia por videoconferencia, del 21 al 30 de septiembre de 2020, para cumplir parcialmente el programa de actividades de su 122º período de sesiones. En esas reuniones, el Grupo de Trabajo siguió examinando la información recibida sobre presuntos casos de desaparición forzada, así como la información facilitada por los Estados y por las fuentes de los casos.



comunicaciones consistieron en 14 llamamientos urgentes conjuntos dirigidos a: Bahrein (1), Camboya (2), Camerún (2), Egipto (1), Emiratos Árabes Unidos (1), Estados Unidos de América (1), Honduras (1), Irán (República Islámica del) (1), Kenya (1), Pakistán (1) y Tailandia (2); y 29 cartas de denuncia conjuntas dirigidas a: Angola (1), Bangladesh (1), Belarús (2), Brasil (1), China (2), Colombia (1), Djibouti (1), Egipto (2), Emiratos Árabes Unidos (2), Estados Unidos de América (2), India (1), Irán (República Islámica del) (1), Mauritania (1), Pakistán (1), Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (1), República Democrática Popular Lao (1), República Popular Democrática de Corea (1), Rwanda (1), Sri Lanka (1), Turquía (1), Venezuela (República Bolivariana de) (1), Yemen (1), Zimbabwe (1) y a “otros actores” (Keenie Meenie Services) (1)¹.

6. El 18 de septiembre de 2020, el Grupo de Trabajo publicó, junto con el Comité contra la Desaparición Forzada, ocho directrices principales sobre la enfermedad por coronavirus (COVID-19) y las desapariciones forzadas. Las directrices tienen por objeto asistir y orientar a los Estados en el cumplimiento sus obligaciones internacionales relativas a la desaparición forzada durante la pandemia de COVID-19 (véase el anexo IV).

7. Durante el período de sesiones, el Grupo de Trabajo examinó y aprobó una denuncia general relativa a Colombia (véase el anexo II).

8. En el anexo V figura la lista completa de las declaraciones y los comunicados de prensa emitidos por el Grupo de Trabajo durante el período que se examina.

II. Otras actividades

9. Durante el período de sesiones, el Grupo de Trabajo se reunió con familiares de personas desaparecidas y con representantes de organizaciones no gubernamentales que trabajan en esta cuestión. El 22 de septiembre de 2020, también celebró una reunión virtual de coordinación con los miembros del Comité contra la Desaparición Forzada.

10. También durante el período de sesiones, el Grupo de Trabajo mantuvo una reunión virtual con representantes del Gobierno del Japón, y reuniones bilaterales oficiosas con otros representantes gubernamentales. Para dar seguimiento a sus intercambios con representantes del Gobierno de Colombia durante el período de sesiones, el Grupo de Trabajo solicitó una visita al país en 2021.

11. Los días 23 y 25 de septiembre de 2020, en el marco de los actos de conmemoración del 40º aniversario de su creación, el Grupo de Trabajo, junto con el Comité contra la Desaparición Forzada, convocó dos webinarios públicos sobre la búsqueda de personas desaparecidas y la investigación de las desapariciones forzadas. El 24 de septiembre de 2020, el Grupo de Trabajo también organizó un panel de expertos en línea sobre las personas desaparecidas y la gobernanza de la memoria, junto con el T.M.C. Asser Instituut.

12. Entre los períodos de sesiones 121º y 122º, el Grupo de Trabajo siguió colaborando con los Estados en la prestación de asistencia y cooperación técnica. Los días 27 y 28 de julio de 2020, facilitó un taller en línea con representantes del Gobierno de Turkmenistán centrado en el mandato, la práctica y los métodos de trabajo del Grupo de Trabajo.

13. El Grupo de Trabajo también ha seguido colaborando con mecanismos de búsqueda especializados de todo el mundo, y acoge con satisfacción los fructíferos intercambios que se han venido produciendo entre las unidades de búsqueda de Colombia, El Salvador, México y el Perú.

¹ Esas comunicaciones se hacen públicas 60 días después de su transmisión al Estado, junto con las respuestas recibidas de los Gobiernos, si las hubiere, y pueden consultarse en: <https://spcommreports.ohchr.org/Tmsearch/TMDocuments>.

III. Información relativa a las desapariciones forzadas o involuntarias en los Estados examinados por el Grupo de Trabajo durante el período de sesiones

Afganistán

Procedimiento ordinario

14. El Grupo de Trabajo, con arreglo a su procedimiento ordinario, transmitió al Gobierno nueve casos (véase el anexo I).

Aplicación de la norma de los seis meses

15. El 31 de agosto de 2020, el Gobierno transmitió información sobre un caso pendiente, sobre cuya base el Grupo de Trabajo decidió aplicar al caso la norma de los seis meses.

Información facilitada por el Gobierno

16. El 31 de agosto de 2020, el Gobierno del Afganistán transmitió información sobre dos casos pendientes, pero esta se consideró insuficiente para darlos por esclarecidos.

Angola

Carta de denuncia conjunta

17. El 2 de junio de 2020, el Grupo de Trabajo transmitió, junto con otros mecanismos de procedimientos especiales, una carta de denuncia relativa a los presuntos actos de intimidación y hostigamiento dirigidos contra los defensores de los derechos humanos que trabajan para la organización no gubernamental Missão de Beneficência Agropecuária do Kubango, Inclusão, Tecnologias e Ambiente (MBAKITA).

Bahrein

Aplicación de la norma de los seis meses

18. El 23 de diciembre de 2019, el Gobierno facilitó información sobre el caso de Mohamed Ramadhan Issa Ali Hussein, sobre cuya base el Grupo de Trabajo decidió aplicar al caso la norma de los seis meses.

Llamamiento urgente conjunto

19. El 29 de julio de 2020, el Grupo de Trabajo transmitió, junto con otros mecanismos de procedimientos especiales, una carta de denuncia relativa a Mohamed Ramadhan Issa Ali Hassan y Hussain Ali Moosa Hassan Mohamed, dos nacionales de Bahrein que se enfrentan a una ejecución inminente tras la confirmación, el 13 de julio de 2020, de las condenas a muerte dictadas contra ellos por el Tribunal de Casación.

Bangladesh

Procedimiento ordinario

20. El Grupo de Trabajo, con arreglo a su procedimiento ordinario, transmitió al Gobierno dos casos (véase el anexo I).

Carta de denuncia conjunta

21. El 1 de septiembre de 2020, el Grupo de Trabajo transmitió, junto con otros mecanismos de procedimientos especiales, una carta de denuncia relativa al enjuiciamiento

de Asaduzzaman Noor y a las amenazas y los actos de intimidación de que presuntamente fue objeto, y al acoso continuo de sus familiares en Bangladesh.

Observación

22. El Grupo de Trabajo observa con preocupación que lleva varios años comunicando informaciones similares sobre la situación de la desaparición forzada en Bangladesh. Le alarma seguir recibiendo casos, muchos de ellos relativos a personas vinculadas a partidos políticos de la oposición, así como la aparente impunidad de esa práctica en el país. También deplora la falta de colaboración con el Grupo de Trabajo. A este respecto, el Grupo de Trabajo señala que este año no ha recibido respuesta a ninguno de los casos pendientes y que, desde que transmitió el primer caso al Gobierno en 1996, solo ha dado por esclarecido un caso. El Grupo de Trabajo espera recibir lo antes posible información sobre los casos pendientes.

23. El Grupo de Trabajo reitera su interés en visitar Bangladesh, expresado en varias comunicaciones transmitidas desde 2013.

Belarús

Procedimiento de acción urgente

24. El Grupo de Trabajo, con arreglo a su procedimiento de acción urgente, transmitió al Gobierno un caso relativo a Maria Kalesnikava, presuntamente secuestrada el 7 de septiembre de 2020 cerca del Museo Nacional de Arte de Minsk por personas no identificadas, asociadas al parecer a los servicios de seguridad de Belarús.

Aplicación de la norma de los seis meses

25. El 5 de octubre de 2020, el Gobierno facilitó información sobre cuya base el Grupo de Trabajo decidió aplicar al caso de la Sra. Kalesnikava la norma de los seis meses.

Cartas de denuncia conjuntas y respuestas

26. El 27 de agosto de 2020, el Grupo de Trabajo transmitió, junto con otros mecanismos de procedimientos especiales, una carta de denuncia relativa a los informes de torturas y malos tratos infligidos a manifestantes detenidos, y por lo menos siete casos de presunta desaparición forzada.

27. El 31 de agosto de 2020, el Gobierno de Belarús respondió a la carta de denuncia conjunta.

28. El 16 de septiembre de 2020, el Grupo de Trabajo transmitió, junto con otros mecanismos de procedimientos especiales, una carta de denuncia relativa a la presunta desaparición forzada de la Sra. Kalesnikava y a los aparentes ataques y persecución sistemáticos de los miembros de la oposición vinculados al Consejo de Coordinación por parte de las fuerzas de seguridad. Según los informes recibidos, la mayoría de los miembros de la oposición también habían sido objeto de desaparición forzada.

29. El 5 de octubre de 2020, el Gobierno de Belarús respondió a la carta de denuncia conjunta.

Información facilitada por las fuentes

30. Las fuentes facilitaron información actualizada sobre tres casos pendientes, pero esta se consideró insuficiente para darlos por esclarecidos.

Observación

31. Preocupan al Grupo de Trabajo las denuncias de desapariciones forzadas de corta duración de líderes de la oposición y manifestantes pacíficos, perpetradas por los servicios de seguridad de Belarús con la intención de sofocar las protestas, reprimir la disidencia y sembrar el miedo. Igualmente alarmantes son los informes que apuntan al incumplimiento de las salvaguardias jurídicas fundamentales, consagradas en la legislación nacional y en el

derecho internacional con el fin de prevenir las violaciones de los derechos humanos. Estas salvaguardias incluyen el registro inmediato, el control judicial de la detención, la notificación inmediata a los familiares de la persona privada de libertad, y el derecho de la persona a contratar a un abogado defensor de su elección. A este respecto, el Grupo de Trabajo pide al Gobierno de Belarús que cumpla plenamente esas salvaguardias, realice investigaciones eficaces, independientes e imparciales de las graves alegaciones de desaparición forzada y ofrezca un recurso efectivo a las víctimas y a sus familiares.

32. También preocupa al Grupo de Trabajo la existencia de una cultura de impunidad que se remonta a varios decenios. Por ello, recuerda que la conclusión o suspensión de una investigación penal relativa a una presunta desaparición forzada no exime al Estado de su obligación de buscar y localizar a la persona desaparecida o sus restos, lo que incluye la identificación de los restos y su restitución a los familiares, con el debido respeto a las costumbres culturales. A este respecto, el Grupo de Trabajo reitera su petición al Gobierno de Belarús de que adopte las medidas necesarias para elaborar y aplicar una estrategia con plazos concretos para el proceso de búsqueda.

Brasil

Carta de denuncia conjunta y respuesta

33. El 29 de junio de 2020, el Grupo de Trabajo transmitió, junto con otros mecanismos de procedimientos especiales, una carta de denuncia relativa a las observaciones públicas formuladas por el Presidente y miembros de su Gobierno en las que se negaba la existencia de una dictadura militar en el Brasil entre 1964 y 1985, se hacía una valoración positiva de lo sucedido durante ese período y se trivializaban las violaciones de los derechos humanos que se habían cometido. En la carta también se hacía referencia a la presunta injerencia del Presidente y de miembros de su Gobierno en la labor de los mecanismos de justicia de transición existentes.

34. El 26 de agosto de 2020, el Gobierno transmitió una respuesta a la mencionada carta de denuncia conjunta.

Camboya

Llamamientos urgentes conjuntos y respuestas

35. El 12 de junio y el 15 de julio de 2020, el Grupo de Trabajo transmitió, junto con otros mecanismos de procedimientos especiales, llamamientos urgentes en relación con el presunto secuestro y desaparición forzada en Camboya de Wanchalearm Satsaksit, nacional de Tailandia, y con la falta de progresos en la investigación.

36. El 19 de junio y el 13 de agosto de 2020, el Gobierno de Camboya respondió a los llamamientos urgentes.

Camerún

Procedimiento de acción urgente

37. El Grupo de Trabajo, con arreglo a su procedimiento de acción urgente, transmitió un caso al Gobierno en relación con Njoka Kingsley Fomomyuy, ciudadano del Camerún nacido el 26 de marzo de 1975, presuntamente secuestrado el 15 de mayo de 2020 de su lugar de residencia por agentes de la seguridad nacional.

Llamamientos urgentes conjuntos y respuesta

38. El 7 de julio de 2020, el Grupo de Trabajo transmitió, junto con otros mecanismos de procedimientos especiales, un llamamiento urgente en relación con la presunta desaparición forzada, tortura y muerte durante la reclusión de Samuel Ajiekah Abuwe, alias Samuel

Wazizi, y la presunta detención arbitraria y desaparición forzada de Njoka Kingsley Fomonyuy.

39. El 14 de agosto de 2020, el Grupo de Trabajo transmitió, junto con otros mecanismos de procedimientos especiales, un llamamiento urgente relativo a las presuntas violaciones de los derechos de 13 personas pertenecientes a la minoría anglófona en las regiones del Noroeste y el Suroeste del Camerún, que incluían casos de detención arbitraria, prisión preventiva prolongada, desaparición forzada, tortura y malos tratos, así como ejecuciones extrajudiciales.

40. El 7 de septiembre de 2020, el Gobierno transmitió una respuesta al llamamiento urgente conjunto de fecha 7 de julio de 2020.

China

Procedimiento de acción urgente

41. El Grupo de Trabajo, con arreglo a su procedimiento de acción urgente, transmitió al Gobierno un caso relativo a Aikebaier Aisaiti, también conocido como Ekpar Asat, quien, según se informó en mayo de 2020, estaba recluido en una prisión de la ciudad de Aksu (Akesu), en la prefectura de Aksu, en la Región Autónoma de Xinjiang Uighur.

Procedimiento ordinario

42. El Grupo de Trabajo, con arreglo a su procedimiento ordinario, transmitió al Gobierno 52 casos (véase el anexo I).

Esclarecimiento basado en la información facilitada por las fuentes

43. Sobre la base de la información facilitada por las fuentes, el Grupo de Trabajo decidió dar por esclarecidos seis casos. Según se informa, dos personas fueron puestas en libertad, tres permanecieron en prisión y una quedó en libertad bajo fianza.

Información facilitada por las fuentes

44. Las fuentes facilitaron información sobre otros cinco casos pendientes, pero esta se consideró insuficiente para darlos por esclarecidos.

Aplicación de la norma de los seis meses

45. El 12 de junio de 2020, el Gobierno facilitó información sobre diez casos pendientes, sobre cuya base el Grupo de Trabajo decidió aplicar a esos casos la norma de los seis meses. Según se informa, las personas interesadas se encuentran en libertad.

Información facilitada por el Gobierno

46. El 12 de junio de 2020, el Gobierno de China transmitió información sobre seis casos pendientes, pero esta se consideró insuficiente para darlos por esclarecidos.

Cartas de denuncia conjuntas y respuestas

47. El 2 de junio de 2020, el Grupo de Trabajo transmitió, junto con otros mecanismos de procedimientos especiales, una carta de denuncia relativa a la presunta desaparición forzada de Gedhun Cheokyi Nyima, aún en paradero desconocido, y a la regulación de la reencarnación de los budas tibetanos en contra de las tradiciones y prácticas religiosas de la minoría budista tibetana.

48. El 13 de julio de 2020, el Gobierno transmitió una respuesta a la mencionada carta de denuncia conjunta. Al Grupo de Trabajo le preocupa que sigan sin confirmarse la suerte y el paradero de Gedhun Cheokyi Nyima.

49. El 13 de julio de 2020, el Gobierno también proporcionó una respuesta a la carta de denuncia conjunta enviada el 7 de mayo de 2020, que seguía pendiente de traducción cuando se celebró el período de sesiones.

50. El 13 de agosto de 2020, el Grupo de Trabajo transmitió, junto con otros mecanismos de procedimientos especiales, una carta de denuncia relativa al juicio y la condena a puerta cerrada de Yu Wensheng, cuyo lugar de reclusión no se ha dado a conocer.

Respuestas a llamamientos urgentes conjuntos

51. El 18 de mayo de 2020 se recibió la traducción de dos respuestas transmitidas por el Gobierno el 3 de abril de 2020 en relación con dos llamamientos urgentes conjuntos enviados el 9 y el 12 de marzo de 2020.

Respuesta a una denuncia general

52. El 12 de junio de 2020, el Gobierno respondió a la denuncia general transmitida después del 119º período de sesiones (A/HRC/WGEID/119/1, anexo I). La respuesta figura en el anexo III del presente documento.

53. Con respecto a la respuesta, el Grupo de Trabajo acoge con satisfacción la información sobre las salvaguardias establecidas. No obstante, si bien la información proporcionada indica que las medidas *liuzhi* deben notificarse a las familias, no aclara si en la notificación se informa sobre el lugar en que se encuentra recluida la persona o sobre su derecho a recibir visitas de sus familiares o a disponer de asistencia letrada. El Grupo de Trabajo reitera que se debe proporcionar rápidamente a los familiares información precisa sobre el lugar de reclusión de la persona privada de libertad, incluidos todos los traslados de que haya sido objeto; el hecho de no hacerlo puede constituir una desaparición forzada.

Observación

54. El Grupo de Trabajo recibió información del Gobierno sobre los procedimientos de notificación a los familiares de los reclusos en los centros de privación de libertad de Xinjiang. Según dicha información, la ubicación del centro se da a conocer a las familias, y las personas pueden regresar a sus hogares y recibir visitas.

55. Sin embargo, al Grupo de Trabajo le preocupan las pautas de los casos que está recibiendo, en particular el número de denuncias que indican que allegados de personas desaparecidas acudieron a embajadas o consulados de China en diferentes países y no recibieron respuesta, o se les dijo que regresaran a China para buscar información sobre sus familiares. El Grupo de Trabajo también está sumamente preocupado por los informes que dan cuenta de la detención de personas por tener parientes en el extranjero o por haber viajado al extranjero, y del temor de los residentes de la Región Autónoma de Xinjiang Uigur a ponerse en contacto con sus familiares en el extranjero porque eso podría dar lugar a represalias.

56. El Grupo de Trabajo subraya el hecho de que las familias de las personas que han sido objeto de desaparición forzada también son víctimas de este delito, y que la angustia y el dolor de la familia pueden constituir una violación del derecho a no ser sometido a torturas y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. El derecho a la verdad es un derecho absoluto que no puede restringirse y existe una obligación absoluta de tomar todas las medidas necesarias para encontrar a la persona (A/HRC/16/48). El Grupo de Trabajo también subraya que se debe proteger a las familias de los malos tratos o la intimidación (Declaración sobre la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, art. 13). Este principio se aplica con independencia de que el familiar en cuestión resida en el mismo país que la persona desaparecida o en el extranjero.

57. El Grupo de Trabajo subraya además que el derecho a un recurso judicial rápido y eficaz como medio para determinar el paradero de las personas privadas de libertad o su estado de salud, o para identificar a la autoridad que ordenó la privación de libertad o la hizo efectiva, es necesario para prevenir las desapariciones forzadas. Los Estados deben asegurar a toda persona que disponga de la información o tenga un interés legítimo y sostenga que una

persona ha sido objeto de desaparición forzada el derecho a denunciar los hechos ante una autoridad estatal competente e independiente, la cual procederá de inmediato a hacer una investigación exhaustiva e imparcial. Estos derechos también son aplicables a los familiares de las víctimas de desaparición forzada que residen en el extranjero y, a este respecto, los consulados y embajadas deben prestar asistencia a esos familiares.

58. El Grupo de Trabajo espera que el Gobierno responda pronto de forma positiva a su solicitud de visita al país, transmitida el 19 de febrero de 2013, y a sus recordatorios posteriores.

Colombia

Carta de denuncia conjunta

59. El 25 de septiembre de 2020, el Grupo de Trabajo transmitió, junto con otros mecanismos de procedimientos especiales, una carta de denuncia sobre el menoscabo y cuestionamiento de los mecanismos del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, así como sobre las críticas y los ataques a la reputación de los miembros de esas instituciones.

Denuncia general

60. El Grupo de Trabajo recibió información de fuentes fidedignas sobre las presuntas dificultades que se oponían a la aplicación de la Declaración sobre la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas en Colombia. La denuncia general, que figura en el anexo II, se centra en el derecho a la verdad y la justicia de las víctimas de desaparición forzada en relación con las obras de dragado en el estuario de San Antonio, que podrían reducir la posibilidad de identificar los restos de las personas desaparecidas cuyos cadáveres fueron eliminados en esa zona.

República Popular Democrática de Corea

Procedimiento ordinario

61. El Grupo de Trabajo, con arreglo a su procedimiento ordinario, transmitió al Gobierno 12 casos (véase el anexo I).

Información facilitada por las fuentes

62. Las fuentes facilitaron información sobre un caso pendiente, pero esta se consideró insuficiente para darlo por esclarecido.

Carta de denuncia conjunta

63. El 23 de junio de 2020, el Grupo de Trabajo transmitió, junto con otros mecanismos de procedimientos especiales, una carta de denuncia relativa a la presunta desaparición forzada de civiles y prisioneros de guerra de la República de Corea tras el estallido de la guerra de Corea el 25 de junio de 1950, y a las personas que fueron secuestradas después de la guerra, entre las que había nacionales de la República de Corea, del Japón y de otros Estados.

64. El 30 de junio de 2020, el Gobierno de la República Popular Democrática de Corea respondió a la carta de denuncia conjunta.

Observación

65. El Grupo de Trabajo reitera su grave preocupación por la falta de cooperación del Gobierno, en particular por las respuestas idénticas que sigue recibiendo en relación con los casos transmitidos. El Grupo de Trabajo destaca la importancia de que se lleven a cabo investigaciones, incluidas búsquedas, que esclarezcan la suerte o el paradero de las personas

desaparecidas, así como de que se le facilite información precisa sobre las medidas adoptadas y los resultados obtenidos de las investigaciones.

Djibouti

Carta de denuncia conjunta y respuesta

66. El 27 de julio de 2020, el Grupo de Trabajo transmitió, junto con otros mecanismos de procedimientos especiales, una carta de denuncia relativa a la reclusión en régimen de incomunicación, las torturas y los malos tratos que al parecer sufrió Mohammed Abdullah Saleh al-Asad en la República Unida de Tanzania, y posteriormente en Djibouti, en el Afganistán y en el Yemen, en el marco del programa de entregas extrajudiciales llevado a cabo por los Estados Unidos de América. La carta también se refería a Zahra Ahmed Mohamed, su esposa, quien supuestamente padeció las consecuencias psicológicas de no tener ninguna información sobre la suerte o el paradero de su marido.

67. El 24 de septiembre de 2020, el Gobierno de Djibouti respondió a la carta de denuncia conjunta.

Egipto

Procedimiento de acción urgente

68. El Grupo de Trabajo, con arreglo a su procedimiento de acción urgente, transmitió al Gobierno ocho casos relativos a:

a) Ahmed Abdelsattar Mohamed Amasha Shawky, ciudadano egipcio nacido el 3 de junio de 1962, presuntamente detenido por agentes de policía el 17 de junio de 2020 en su domicilio y conducido a un lugar desconocido. El Grupo de Trabajo transmitió y esclareció un primer procedimiento de acción urgente en relación con Ahmed Abdelsattar Mohamed Amasha Shawky en 2017;

b) Ibrahim Ahmad, ciudadano egipcio nacido el 5 de febrero de 1984, a quien supuestamente se vio por última vez en junio de 2020 en la Subdivisión de Seguridad Nacional de Al Abbassiya, provincia de El Cairo;

c) Osama Saad Mohamed Emara, ciudadano egipcio nacido el 7 de agosto de 1989, presuntamente detenido el 29 de julio de 2020 junto con su padre y su hermano en el domicilio familiar por agentes de policía y de la seguridad nacional;

d) Ahmed Saad Mohamed Emara, ciudadano egipcio nacido el 8 de diciembre de 1993, presuntamente detenido el 29 de julio de 2020 junto con su padre y su hermano en el domicilio familiar por agentes de policía y de la seguridad nacional;

e) Saad Mohamed Emara, ciudadano egipcio nacido el 29 de diciembre de 1951, presuntamente detenido el 29 de julio de 2020 junto con sus dos hijos en el domicilio familiar por agentes de policía y de la seguridad nacional;

f) Ahmed Mohamed Ahmed El-Sayed Ahmed Ayoub, ciudadano egipcio nacido el 4 de febrero de 1994, presuntamente secuestrado el 6 de julio de 2020 en su domicilio por miembros de las fuerzas de seguridad del Estado vestidos de civil;

g) Hasan Gouda, ciudadano egipcio nacido el 12 de abril de 1995, de quien al parecer se supo por última vez el 16 de abril de 2020, mientras se encontraba recluido en la comisaría de Bandar, en Asuán;

h) Sara Fathi Ibrahim Ahmad, ciudadana egipcia nacida el 8 de diciembre de 1989, presuntamente secuestrada en su domicilio el 15 de abril de 2020 por agentes de la seguridad nacional en El Cairo.

Procedimiento ordinario

69. El Grupo de Trabajo, con arreglo a su procedimiento ordinario, transmitió al Gobierno seis casos (véase el anexo I).

Esclarecimiento basado en la información facilitada por las fuentes

70. Sobre la base de la información facilitada por las fuentes, el Grupo de Trabajo decidió esclarecer nueve casos relativos a Abdulrahman Ali Mahmoud Ali Fatih al-bab, Hasan Mahmoud Ragab al-Kabbani, Ahmed Mosbah Abu Sati Tantawy, Naji Mohammad Naji Mohammad Salim, Hadi Refaat Abdulwahed Mostafa, Ashraf Zahran, Mohamed Ahmed Hassan Ahmed y Mohamaden Gouda, todos ellos privados de libertad, y a Abdulrahman Mohamed Yasin Ali, que ya ha sido puesto en libertad.

Aplicación de la norma de los seis meses

71. El 3 de septiembre de 2020, el Gobierno facilitó información sobre cuya base el Grupo de Trabajo decidió aplicar la norma de los seis meses al caso de Sara Fathi Ibrahim Ahmed, que ha sido puesta en libertad bajo fianza.

Información facilitada por las fuentes

72. Las fuentes facilitaron información sobre tres casos pendientes, pero esta se consideró insuficiente para darlos por esclarecidos. Sobre la base de la nueva información recibida de una fuente, el Grupo de Trabajo decidió suspender la norma de los seis meses que había aplicado en el 121^{er} período de sesiones a un caso relativo a un menor de nacionalidad egipcia.

Esclarecimiento

73. Sobre la base de la información facilitada previamente por el Gobierno, el Grupo de Trabajo decidió dar por esclarecidos 28 casos. En 21 de ellos, las 28 personas que se mencionan a continuación estaban privadas de libertad: Abdelrahman Mohamed, Omar Khaled Taha Ahmed, Mohamed Gamal Ahmed Abdulmaguid Ali, Islam Raafat Abdel Mohsen Mohane, Abdurrahman Karim Fattouh Hamed, Mosaab Kamal Tawfik Mosaab Kamal Tawfik, Jamal Abdelwahab Awad Allam, Ahmed Adel Abdo El Zraa, Moatasem Ballah Adel Abdo El Zraa, Abdel Rahman Saad Saad Eid Noser, Mohamed Ezzeddin Youssef Malek, Islam Ali Abd El-aal Mohammed, Mohamed Abdel Malek Hussein Abdel Malek, Alaa El Sayed Ali Ibrahim, Hesham Abdelmaksoud Ahmed Ghobashi, Shrief El-Sayed El-Mohamady El-Sayed, Mohamed Ali Hassan Seoudy, Mohamed Magdi Mohamed Hussien, Magdi Mohamed Mohamed Abdeldayem, Ahmed Adel Sultan Abd al-Halim y Mustafa Hussein Mohamed Omar. En siete de los casos, se ha informado de la puesta en libertad de las siguientes personas: Mohamed Ahmed Abdelhamid Antar, El Sayed Qasem Saleh Ali El Gezawy, Eslam Atya Ali Atya Sarhan, Ahmed Kamal Ragab Soliman Frag, Salah Hussin Mohamed Ali Ghoneim, Moaaz Ahmed Mohamed El Farmawy y Mohamed El-Sherif.

Llamamiento urgente conjunto y respuesta

74. El 19 de agosto de 2020, el Grupo de Trabajo transmitió, junto con otros mecanismos de procedimientos especiales, un llamamiento urgente en relación con Mohammad Awsam Abdulaziz Ali Rashed, estudiante del Departamento de Mecatrónica de la Facultad de Ingeniería, y su padre, Awsam Abdulaziz Ali Rashed, ambos presuntamente recluidos en régimen de incomunicación en la prisión de Burj Al Arab tras haber sido condenados por tribunales militares y penales, respectivamente, sin las debidas garantías procesales. Al 1 de marzo de 2020, se desconocía su suerte.

75. El 9 de septiembre de 2020, el Gobierno transmitió una respuesta al mencionado llamamiento urgente conjunto.

Carta de denuncia conjunta

76. El 2 de junio de 2020, el Grupo de Trabajo transmitió, junto con otros mecanismos de procedimientos especiales, una carta de denuncia relativa a la detención y el ingreso en prisión preventiva de destacados activistas por los derechos laborales y dirigentes sindicales, entre ellos Haytham Mohamadein, Hassan Barbary, Alla Essam y Khalil Rizk.

77. El 29 de julio de 2020, el Grupo de Trabajo transmitió, junto con otros mecanismos de procedimientos especiales, una carta de denuncia relativa a la presunta reclusión permanente en cárceles egipcias de defensores de los derechos humanos y otras personas que, desde el brote de la pandemia de COVID-19, han visto gravemente restringida su comunicación con el mundo exterior, habiéndose renovado su prisión preventiva *in absentia*, y que corren un grave riesgo de contraer el virus.

Observación

78. El Grupo de Trabajo ha seguido recibiendo informes de detenciones realizadas por agentes de policía y de la seguridad nacional sin la presentación de una orden de detención, y de los persistentes obstáculos para presentar denuncias ante las autoridades competentes en relación con los casos de desaparición forzada.

79. El Grupo de Trabajo lamenta haber tenido que reabrir el caso de Ahmed Shawky Abdelsattar Mohamed Amasha el 23 de junio de 2020. Las nuevas denuncias de desaparición forzada se producen tras un primer caso denunciado, que se transmitió y esclareció inicialmente en 2017. El Grupo de Trabajo considera estos informes tanto más lamentables cuanto que el caso de Ahmed Shawky Abdelsattar Mohamed Amasha se incluyó en los informes del Secretario General sobre la cooperación con las Naciones Unidas, sus representantes y mecanismos en la esfera de los derechos humanos correspondientes a 2017, 2018, 2019 y 2020. El Grupo de Trabajo observa con preocupación las denuncias de desaparición forzada del periodista Osama Saad Mohamed Emara y de dos miembros de su familia, entre ellos su padre, Saad Mohamed Mohamed Emara, y su hermano, Ahmed Saad Mohamed Emara. El Grupo de Trabajo observa que sigue recibiendo informes de desapariciones que se producen durante el proceso de puesta en libertad, como sucedió al parecer en el caso de Hasan Gouda. Recuerda que la puesta en libertad de toda persona privada de libertad debe cumplirse con arreglo a modalidades que permitan verificar con certeza que ha sido efectivamente puesta en libertad y que lo ha sido en condiciones tales que estén aseguradas su integridad física y su facultad de ejercer plenamente sus derechos. A este respecto, el Grupo de Trabajo solicitó información sobre las medidas adoptadas por el Gobierno de Egipto para aplicar las disposiciones del artículo 11 de la Declaración sobre la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.

80. El Grupo de Trabajo suspendió la norma de los seis meses que se había aplicado anteriormente al caso de un menor, y está sumamente preocupado por las denuncias de que el niño podría haber fallecido como resultado de las torturas que se le infligieron mientras estaba recluso.

El Salvador

Información facilitada por el Gobierno

81. El 21 de agosto de 2019, el Gobierno de El Salvador transmitió información sobre cuatro casos pendientes, pero esta se consideró insuficiente para darlos por esclarecidos.

Honduras

Llamamiento urgente conjunto

82. El 25 de septiembre de 2020, el Grupo de Trabajo transmitió, junto con otros mecanismos de procedimientos especiales, un llamamiento urgente relativo a la muerte violenta y la desaparición de varios defensores de los derechos humanos en Honduras, así

como a las amenazas y el hostigamiento de que son objeto, en lo que parece ser una situación de alto riesgo para estas personas.

India

Procedimiento ordinario

83. El Grupo de Trabajo, con arreglo a su procedimiento ordinario, transmitió al Gobierno nueve casos (véase el anexo I).

Carta de denuncia conjunta

84. El 1 de julio de 2020, el Grupo de Trabajo transmitió, junto con otros mecanismos de procedimientos especiales, una carta de denuncia relativa a la presunta clausura repentina de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jammu y Cachemira en octubre de 2019, que ha dejado a la población de la región con escasos recursos jurídicos para pedir justicia por las posibles violaciones de los derechos humanos.

Observación

85. El Grupo de Trabajo observa con preocupación que sigue recibiendo casos relativos a desapariciones forzadas presuntamente ocurridas en Jammu y Cachemira, incluidos casos de los decenios de 1990 y 2000. Señala que, en muchos casos, a pesar de que se interpusieron recursos jurídicos y de que han transcurrido décadas desde que ocurrieron las desapariciones, apenas se ha avanzado en la determinación de la suerte y el paradero de esas personas.

86. El Grupo de Trabajo desea reiterar que los Estados deben tomar medidas legislativas, administrativas, judiciales y otras medidas eficaces para prevenir o erradicar los actos de desapariciones forzadas; que ninguna circunstancia, cualquiera que sea, puede ser invocada para justificar las desapariciones forzadas; que debe realizarse una investigación de todos los casos mientras no se haya aclarado la suerte de la víctima de una desaparición; y que todo acto de desaparición forzada debe ser considerado delito permanente mientras sus autores continúen ocultando la suerte y el paradero de la persona desaparecida y mientras no se hayan esclarecido los hechos (Declaración sobre la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, arts. 3, 7, 13 y 17).

87. El Grupo de Trabajo deplora no haber recibido durante años respuesta alguna del Gobierno en relación con los casos transmitidos y espera recibir información pronto. Espera también que el Gobierno responda pronto de forma positiva a su solicitud de visita al país, transmitida el 16 de agosto de 2010, y a sus recordatorios posteriores.

Irán (República Islámica del)

Procedimiento de acción urgente

88. El Grupo de Trabajo, con arreglo a su procedimiento de acción urgente, transmitió al Gobierno dos casos relativos a:

a) Manuchehr Bakhtiari, secuestrado en el aeropuerto de la isla de Kish el 13 de julio de 2020 por miembros del Ministerio de Inteligencia, según se informó el 20 de julio de 2020;

b) Hedayat Abdollahpour, trasladado a un lugar desconocido desde el pabellón de los condenados a muerte de la prisión central de Urumieh, en la provincia de Azerbaiyán Occidental, según la información recibida el 16 de junio de 2020.

Procedimiento ordinario

89. El Grupo de Trabajo, con arreglo a su procedimiento ordinario, transmitió al Gobierno cuatro casos (véase el anexo I).

Aplicación de la norma de los seis meses

90. El 7 y el 27 de agosto de 2020, el Gobierno facilitó información sobre dos casos pendientes, sobre cuya base el Grupo de Trabajo decidió aplicar a esos casos la norma de los seis meses.

Información facilitada por el Gobierno

91. El 11 de agosto de 2020, el Gobierno de la República Islámica del Irán transmitió información sobre un caso, pero esta se consideró insuficiente para darlo por esclarecido.

Carta de denuncia conjunta

92. El 3 de septiembre de 2020, el Grupo de Trabajo transmitió, junto con otros mecanismos de procedimientos especiales, una carta de denuncia sobre la constante negativa de las autoridades a revelar las circunstancias de la muerte y el paradero de miles de disidentes políticos que habían sido víctimas de desaparición forzada y posteriormente, según se informa, ejecutados extrajudicialmente entre julio y principios de septiembre de 1988, y sobre su rechazo a proporcionar a las familias certificados de defunción precisos y completos.

Llamamiento urgente conjunto y respuesta

93. El 17 de junio de 2020, el Grupo de Trabajo transmitió, junto con otros mecanismos de procedimientos especiales, un llamamiento urgente relativo a la presunta desaparición forzada y ejecución secreta de Hedayat Abdollahpour, miembro de la minoría kurda.

94. El 12 de agosto de 2020, el Gobierno transmitió una respuesta a la mencionada carta de denuncia conjunta. En su respuesta, el Gobierno refuta las alegaciones formuladas por varios mecanismos de procedimientos especiales y facilita su propia versión de los hechos, indicando que el Sr. Abdollahpour ha sido ejecutado.

Observación

95. Con respecto a las alegaciones anteriores, el Grupo de Trabajo recuerda que, según el artículo 10 de la Declaración sobre la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, toda persona privada de libertad deberá ser mantenida en lugares de detención oficialmente reconocidos y, con arreglo a la legislación nacional, presentada sin demora ante una autoridad judicial luego de la aprehensión. En el párrafo 2 del artículo 10 se dispone que los Estados deben proporcionar rápidamente información exacta sobre la detención de esas personas y el lugar o los lugares donde se cumple, incluidos los lugares de transferencia, salvo voluntad en contrario manifestada por las personas privadas de libertad. Además, en el párrafo 3 del mismo artículo se exige a los Estados que mantengan en todo lugar de detención un registro oficial actualizado de todas las personas privadas de libertad.

96. Con respecto a la información recibida sobre el continuo ocultamiento del lugar de sepultura de las víctimas de desaparición forzada presuntamente ejecutadas, el Grupo de Trabajo recuerda que la desaparición forzada continúa hasta que se determinan la suerte y el paradero de la persona en cuestión, independientemente del tiempo transcurrido, y que los familiares tienen derecho a la verdad, lo que significa el derecho a conocer la evolución y resultados de la investigación, la suerte y el paradero de las personas desaparecidas y las circunstancias de su desaparición, así como la identidad del autor o los autores (A/HRC/16/48). La negativa a entregar el cuerpo de una persona ejecutada para su entierro constituye un trato inhumano de la familia afectada (véanse A/67/279, párr. 52, y CCPR/C/106/D/2120/2011). Como el Grupo de Trabajo subrayó en su comentario general sobre el derecho a la verdad en relación con las desapariciones forzadas, la familia de una persona fallecida tiene derecho a recuperar los restos mortales de su ser querido y organizar el entierro de acuerdo con sus tradiciones, religión o cultura (A/HRC/16/48, secc. II G), párr. 6).

Iraq

Procedimiento ordinario

97. El Grupo de Trabajo, con arreglo a su procedimiento ordinario, transmitió al Gobierno un caso relativo a Abdel-Wahhab Allawi Aboud Latif Al Najdi, ciudadano iraquí nacido el 17 de agosto de 1978, a quien se vio por última vez el 6 de junio de 2007 en un trayecto de autobús entre Fallujah y Bagdad. Se cree que el Ejército del Mahdi es responsable de su desaparición.

Kenya

Llamamiento urgente conjunto

98. El 20 de mayo de 2020, el Grupo de Trabajo transmitió, junto con otros mecanismos de procedimientos especiales, una carta de denuncia relativa a las amenazas proferidas contra la defensora de los derechos humanos Ruth Mumbi, que se ve expuesta al riesgo de una desaparición forzada por defender el derecho a la vivienda de las personas desalojadas.

República Democrática Popular Lao

Procedimiento de acción urgente

99. El Grupo de Trabajo, con arreglo a su procedimiento de acción urgente, transmitió al Gobierno cuatro casos relativos a Vacher Her, a Zoua Her, a Kia Vang y a un niño, todos ellos supuestamente desaparecidos después de pasar el puesto de control de Paksan.

Información facilitada por el Gobierno

100. El 21 de agosto de 2020, el Gobierno de la República Democrática Popular Lao transmitió información sobre dos casos, pero esta se consideró insuficiente para darlos por esclarecidos.

Carta de denuncia conjunta

101. El 31 de agosto de 2020, el Grupo de Trabajo transmitió, junto con otros mecanismos de procedimientos especiales, una carta de denuncia relativa a la alarmante situación que al parecer vive la comunidad indígena mong de la región de Phou Bia (denominada ChaoFa Hmong), y que incluye ataques indiscriminados contra la comunidad, desapariciones forzadas, y la denegación del acceso a alimentos, agua potable y atención sanitaria.

Líbano

Procedimiento ordinario

102. El Grupo de Trabajo, con arreglo a su procedimiento ordinario, transmitió al Gobierno el caso relativo a Khaled Alwies, ciudadano de la República Árabe Siria que tiene reconocida la condición de refugiado en el Líbano, y que fue presuntamente detenido el 22 de noviembre de 2012 mientras se encontraba en las dependencias de renovación del permiso de residencia de la Dirección General de Seguridad General en Beirut.

Libia

Procedimiento de acción urgente

103. El Grupo de Trabajo, con arreglo a su procedimiento de acción urgente, transmitió al Gobierno el caso relativo a Usama Edawi A. Aburas, un nacional libio que era el jefe interino de la Comisión Nacional de Lucha contra la Corrupción de Libia, y que fue presuntamente

secuestrado alrededor del mediodía del 15 de junio de 2020 por un grupo de hombres armados pertenecientes a la Fuerza Especial de Disuasión, al parecer afiliada al Ministerio del Interior.

Procedimiento ordinario

104. El Grupo de Trabajo anunció que, a partir de septiembre de 2019, comenzaría a documentar las vulneraciones equivalentes a actos de desaparición forzada perpetrados por agentes no estatales (A/HRC/42/40, párr. 94). Por ello, durante el período de sesiones, el Grupo de Trabajo examinó un caso equivalente a un acto de desaparición forzada presuntamente perpetrado en la parte del territorio de Libia bajo control del Ejército Nacional Libio². El Grupo de Trabajo transmitió el caso al Gobierno de Libia y al Ejército Nacional Libio con arreglo a su procedimiento ordinario. El caso se refiere a Omar Al Mukhtar Ahmed Al Daguel, un ciudadano libio que supuestamente fue visto por última vez en diciembre de 2020 en la prisión de Al Kouifya en Bengasi, que se encuentra bajo la autoridad del Ejército Nacional Libio.

Aplicación de la norma de los seis meses

105. El 22 de enero de 2020, el Gobierno facilitó información sobre cuya base el Grupo de Trabajo decidió aplicar la norma de los seis meses a seis casos, relativos a: Ayman Salim Muhammad Dababash, Abdelatif Al Raqoubi Salem Muhammad, Salem Saeed Salem Awad Jadran al-Mughrabi, Ali al-Dabea Saleh al-Talhi, Almanafi Ahmed Abdessalam Hassane y Majdi Faraj Hamad Salah Al Hawat. Al parecer, los seis hombres fueron puestos en libertad.

Información facilitada por el Gobierno

106. El 22 de enero de 2020, el Gobierno de Libia transmitió información sobre ocho casos pendientes, pero esta se consideró insuficiente para darlos por esclarecidos.

Maldivas

Información facilitada por el Gobierno

107. El 11 de junio de 2020, el Gobierno de Maldivas transmitió información sobre un caso pendiente, pero esta se consideró insuficiente para darlo por esclarecido.

Observación

108. El Grupo de Trabajo acoge con satisfacción la información de que el Parlamento de Maldivas ha aprobado la ratificación de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, y espera que el proceso de ratificación pueda completarse con prontitud.

Mauritania

Carta de denuncia conjunta

109. El 11 de junio de 2020, el Grupo de Trabajo transmitió, junto con otros mecanismos de procedimientos especiales, una carta de denuncia relativa a la falta de recursos efectivos para las víctimas de violaciones de los derechos humanos cometidas durante el llamado período del *passif humanitaire*, y al proyecto de ley sobre la justicia de transición que se ha presentado al Parlamento.

² El Grupo de Trabajo subraya que los casos remitidos al Ejército Nacional Libio no implican en absoluto juicio alguno sobre la condición jurídica de territorios, ciudades o zonas, o de sus autoridades.

México

Información facilitada por las fuentes

110. Las fuentes facilitaron información sobre cuatro casos pendientes, pero esta se consideró insuficiente para darlos por esclarecidos.

Marruecos

Respuesta a una denuncia general

111. El 17 de junio de 2020, el Gobierno de Marruecos respondió a la denuncia general transmitida por el Grupo de Trabajo el 17 de abril de 2020 (A/HRC/WGEID/120/1, párr. 99 y anexo I). En su respuesta, el Gobierno de Marruecos señala que la denuncia general omite deliberadamente los méritos del proceso de justicia de transición de Marruecos. Recuerda los avances que se han producido a lo largo de ese proceso en relación con el derecho a la verdad, la memoria, la indemnización y las garantías de no repetición. El texto íntegro de la respuesta figura en el anexo III del presente informe.

Nepal

Respuesta a una carta de denuncia conjunta

112. El 15 de junio de 2020, el Gobierno transmitió una respuesta a la carta de denuncia conjunta enviada el 16 de marzo de 2020 en relación con la supuesta falta de consultas efectivas a las víctimas en relación con la enmienda de la Ley de la Comisión de Investigación de Casos de Personas Desaparecidas y de la Verdad y la Reconciliación 2071 (2014).

Pakistán

Procedimiento de acción urgente

113. El Grupo de Trabajo, con arreglo a su procedimiento de acción urgente, transmitió al Gobierno 12 casos relativos a:

- a) Zubair Ahmed, nacional del Pakistán, presuntamente secuestrado en el campamento militar de Soro Mand por el Cuerpo de Fronteras el 15 de mayo de 2020;
- b) Sana Ullah Baloch, nacional del Pakistán, presuntamente secuestrado mientras se dirigía a su domicilio de Muhalla Thana, en Kharan, Baluchistán, por agentes de seguridad vestidos de civil, el 11 de mayo de 2020;
- c) Muhammad Azum, nacional del Pakistán, presuntamente detenido en la localidad de Zabad, en la zona de Gresha de Nal, en Khuzdar, Baluchistán, por el ejército pakistaní durante una redada en su domicilio el 13 de junio de 2020;
- d) Un menor, presuntamente secuestrado de su residencia de Nazrabad, Baluchistán, por las fuerzas militares y de seguridad el 1 de mayo de 2020;
- e) Muzawar Khan, nacional del Pakistán, presuntamente detenido en Miami Kabul Khel, Shewah, Distrito de Waziristán del Norte, Jaiber Pastunjuá, por agentes del servicio secreto militar el 10 de mayo de 2020;
- f) Aurang Zaib, nacional del Pakistán, presuntamente secuestrado en la unidad núm. 5342 del sector 15/16, 14 Gulshan Mazdoor Hub River Road, en Baldia, Karachi, por hombres armados vestidos de civil, alrededor de las 20.00 horas del 2 de junio de 2020;
- g) Mina Jan, nacional del Pakistán, presuntamente secuestrado en su ciudad natal en el distrito de Tank, adyacente a la Zona Tribal de Administración Federal del Distrito de Waziristán del Sur, por agentes de la policía pakistaní del Departamento de Lucha contra el Terrorismo y agentes del servicio secreto militar pakistaní el 5 de agosto de 2020;

h) Ghullam Mahdi Chandio, alias Ghullam Mahdi, nacional del Pakistán, presuntamente detenido durante una redada en su residencia en el apartamento núm. 407 del Complejo Iqra, en Gulistan-e-Johar, Karachi, por personal armado, incluidos policías y *rangers* vestidos de civil, el 7 de julio de 2020;

i) Mahfooz Ismail Notkani, nacional del Pakistán, presuntamente detenido en su residencia de Notkani Muhalla, pabellón núm. 04, cerca de la escuela secundaria superior para varones de Shaheed Fazil Rahoo (Golarchi) en el distrito de Badin, por agentes del Estado uniformados y armados, incluidos agentes de policía, y por personas vestidas de civil alrededor de las 3.10 horas del 24 de junio de 2020;

j) Shafqat Hussain Malik, nacional del Pakistán, presuntamente detenido en su domicilio en el edificio núm. B-2 del Hospital Civil Colony Ghotki, en Sindh, por miembros armados y enmascarados de los Rangers del Pakistán de Sind, en uniforme militar, junto con dos personas vestidas de paisano, alrededor de las 12.45 horas del 22 de junio de 2020;

k) Waqar Manzoor, nacional del Pakistán, presuntamente secuestrado frente a su domicilio de Tazi Abad, Pedrak, en Turbat, Kech Makran, por personas no identificadas que, según se cree, eran agentes del Estado, alrededor de las 20.45 horas del 20 de junio de 2020;

l) Ejaz Khan, nacional del Pakistán, presuntamente secuestrado en la madrasa de Darul Huda, Territorio Capital de Islamabad, por agentes del servicio secreto militar pakistaní el 22 de agosto de 2020.

Procedimiento ordinario

114. El Grupo de Trabajo, con arreglo a su procedimiento ordinario, transmitió al Gobierno 37 casos (véase el anexo I).

Aplicación de la norma de los seis meses

115. El 31 de agosto de 2020, el Gobierno facilitó información sobre 77 casos pendientes, sobre cuya base el Grupo de Trabajo decidió aplicar a esos casos la norma de los seis meses.

Información facilitada por el Gobierno

116. El 31 de agosto de 2020, el Gobierno del Pakistán transmitió información sobre 29 casos, pero esta se consideró insuficiente para darlos por esclarecidos.

Esclarecimiento

117. Sobre la base de la información facilitada previamente por el Gobierno, el Grupo de Trabajo decidió dar por esclarecidos 174 casos a los que había aplicado la norma de los seis meses en su 120º período de sesiones (A/HRC/WGEID/120/1, párr. 108), relativos a: Shahab Ikram, Shahab Ikram, Allah Ditto, Zakir Bangulzai, Mir Sohrab Khan Marri, Sharif Ahmad Baloch, Bukhsh Muhammad, Murtaza Chandio, Zubirahmed Baloch, Hameed Baloch, Karim Uddin Syed, Muhammad Rehan Muhammad Haroon, Tanveer Ahmed Zameer Ahmed, Syed Aashiq Elahi, Muhammad Rehan Akram, Faisal Khurshid, Mansoor Muhammad, Mirza Zeeshan Baig, Muhammad Ali Muhammad Yousuf, Muhammad Ghayas Ahmed Muhammad Muhammad Shabir Ahmed, Muhammad Shafiq Muhammad Rafiq, Naveed Ahmed Syed, Syed Akhtar Hussain Ather Hussain, Aamir Ali Ashiq Ali, Muhammad Kashif Muhammad Yousuf, Farhan Farooq Muhammad Farooq, Muhammad Shakeel Fateh Muhammad Khan, Ali Mehmood, Syed Farhan Hashmi Syed Maqbool Ahmed, Syed Saleem Ali Syed Faraz Ali, Ali Lodhi Nasarullah, Shah Nawaz Gayasuddin, Zafar Ali Khan Zahid Ali Khan, Faisal Nadeem Jameel Ahmed, Waseem Qamar Ali, Zeeshan Zaki, Muhammad Imran Muhammad Yameen, Nasir Shah Ali, Muhammad Aamir Saeed, Waseem Ahmed Abdul Ghani, Muhammad Sohail, Riyaz Ahmed, Raheel Abdul, Muhammad Siddiq, Shabbir Ali Abid Ali, Rizwan Akram Niazi, Shahnawaz Muhammad Iftikhar, Muhammad Iftikhar Muhammad Wali, Haider Ali Khursheed Haider, Faheem Andah Rajput, Muhammad Ejaz, Zeeshan Saleem Durrani, Farhan Mitha Umer Deen, Abdul Sattar Khan Sher Afghan, Zahid Ali Khan Nasir Ali Shah, Ali Syed Murad Ali Syed Muhammad, Barkat Ali Rehmatuddah, Rayaz Ahmed Mushtaq Ahmed, Muhammed Yaseen Muhammad Yameen, Shakeel Ahmed

Ghaffar, Imran Khan, Aziz Ali Ali, Hammad Sharif, Jan Muhammad, Jahanzib Jahanzib, Hafiz Mohammad Tabish Qazi Mohammad Safdar, Abdul Hameed Muhammad Aslam, Aziz Uddin Assif Aziz, Waheed Ullah Ubaid Ullah Habib, Qureshi Niaz Hussain Mohammad Imram, Naveed Anwar Siddique Khursheed Anwar Siddique, Khushi Muhammad Salahuddin, Iqbal Ali Liaquat Ali, Safeer Rehman Shafique Rehman, Muhammad Majid Khan Junaid Muhammad Mufeez Khan, Muhammad Nizam Abdul Jalil, Syed Rehan Uddin Misbah Uddin, Raheel Mansoori Abdul Sattar, Muhammad Nazar Mukarram Abdul Razzaq, Muhammad Tariq Siddiqui Masood Ilahi Siddiqui, Majid Ali Khan Kakir Ali Khan, Muhammad Irfan Khan Muhammad Abrar Khan, Sharif Ikramuddin, Usama Junaid, Jawad Ali, Bahadur Sher Syed, Fazal Raheem, Luqman, Sagheer Ahmad Shah, Muhammad Amir Baloch, Hafiz Hassan Akbar Hafiz Hassan Akbar, Hasnain Afzal Raza Hasnain Afzal Raza, Saleem Shazad Mehboob Elahi, Mohammad Ashraf Noor Mohammad, Nafees Ahmed Siddiqui Zaheer Ahmed Siddiqui, Kashif Kashif, Khamadan Khan, Hafiz Basheer Ahmad, Huzaifa, Molana Shalim, Adeem Sartaj, Naeem Muhammad, Akhtar Naveed, Abid Hussain, Kashif Khan, Zabit Khan, Mohammed Azeem, Muhammad Farooq Muhammad Ashraf, Syed Shiraz Ali Syed Zahid Ali Hashmi, Gul Mohammad, Ghulum Raza Raza Jarwar, Ijaz Ullah, Alamgir Qambrani, Muhammad Farhan Muhammad Hassan, Abdul Aziz Ansari Abdul Sattar Ansari, Muneer Ali Khan, Amir Panhar Masroor Ahmed, Farman Ali Mst Fehmida Khanam, Inam Ullah Abassi, Abdullah Shah, Munir Ahmed Haqani, Muhammad Islam, Riaz Ul Iqbal, Imran Mumtaz, Ahmed Khan, Muhammad Yousaf, Muhammad Yasir, Mehran, Khalil Ahmad Baloch, Mehboob, Tehseen Askari, Nasir Aziz, Umer Yaar, Abdul Rasheed, Shehzad Qayyum, Hidayatullah Lohar, Gul Wahab, Muhammad Farooq, Shoukat Khan, Muhammad Ismail, Ali Muhammad, Zia-ur-Mustafa Channa, Syed Ameer Faisal, Mudasir Hassan, Fareed Ghulam, Syed Sheeraz Haider Ali Sheeraz, Abdul Rehman, Shakoor Abdul, Tahir Mehmood, Molana Shabbir Ahmad Usmani, Mihadullah, Hussain Ahmed, Saleem Shah, Azhar Haroon, Muhammad Sher Ali Khan, Shakirullah, Muhammad Siddique, Abdul Qadeer Khan, Bakht Sher, Rasool Nawaz, Sabir Khan, Sumiullah, Khan Laali, Rasheed Iqbal, Fahad Mehmood, Israr Ahmad, Sohail Ahmad Khan, Asad Abbas, Safdar Muavia, Zakirullah, Ajab Khan, Imtiaz, Ali Murad Rind Baloch y Muhammad Aqib Shahid. En 89 de esos casos, se informó de que las personas en cuestión se encontraban en libertad; en los 85 casos restantes, las personas permanecían recluidas

Llamamiento urgente conjunto

118. El 11 de junio de 2020, el Grupo de Trabajo transmitió, junto con otros mecanismos de procedimientos especiales, un llamamiento urgente en relación con la desaparición continuada, con riesgo de tortura y malos tratos, del defensor de los derechos humanos Idris Khattak.

Carta de denuncia conjunta

119. El 31 de agosto de 2020, el Grupo de Trabajo transmitió, junto con otros mecanismos de procedimientos especiales, una carta de denuncia sobre la reclusión continuada en régimen de incomunicación del Sr. Khattak, y sobre el riesgo de tortura y malos tratos a que se enfrentaba.

Paraguay

Respuesta a una carta de denuncia conjunta

120. El 14 de agosto de 2020, el Gobierno transmitió una respuesta a la carta de denuncia conjunta enviada el 7 de agosto de 2019. En la carta se proporcionaban detalles de la sentencia de la Cámara de Apelaciones del Paraguay, de 22 de mayo de 2019, por la que se daba por concluido el proceso penal contra los acusados Camilo Almada Morel y Eusebio Torres Romero por delitos relacionados con detenciones arbitrarias, ejecuciones arbitrarias y torturas cometidos entre abril de 1976 y mayo de 1979 y se disponía su puesta en libertad, lo que presuntamente daría lugar a la impunidad de crímenes de lesa humanidad.

Filipinas

Esclarecimiento basado en la información facilitada por las fuentes

121. Sobre la base de la información facilitada por las fuentes, el Grupo de Trabajo decidió dar por esclarecido un caso. Según se informa, esta persona ha fallecido.

Información facilitada por las fuentes

122. Las fuentes facilitaron información sobre otros tres casos pendientes, pero esta se consideró insuficiente para darlos por esclarecidos.

Información facilitada por el Gobierno

123. El Grupo de Trabajo terminó de procesar la información proporcionada por el Gobierno de Filipinas el 11 de septiembre de 2019. La información sobre otros 17 casos no se consideró suficiente para darlos por esclarecidos.

Observación

124. El Grupo de Trabajo espera que el Gobierno responda pronto de forma positiva a su solicitud de visita al país, transmitida el 3 de abril de 2008, y a sus recordatorios posteriores.

Qatar

Procedimiento de acción urgente

125. El Grupo de Trabajo, con arreglo a su procedimiento de acción urgente, transmitió al Gobierno un caso relativo a Abdul Razzak Ahmad Erzaik, ciudadano de la República Árabe Siria nacido el 4 de mayo de 1985, presuntamente secuestrado el 27 de mayo de 2020, cerca de su domicilio de Doha, por los servicios de seguridad del Estado.

Federación de Rusia

Procedimiento ordinario

126. El Grupo de Trabajo, con arreglo a su procedimiento ordinario, transmitió al Gobierno 23 casos (véase el anexo I).

Información facilitada por las fuentes

127. Las fuentes facilitaron información sobre 15 casos pendientes, pero esta se consideró insuficiente para darlos por esclarecidos.

Información facilitada por el Gobierno

128. El 22 de junio de 2020, el Gobierno transmitió información sobre diez casos pendientes, pero esta se consideró insuficiente para darlos por esclarecidos.

Esclarecimiento

129. Sobre la base de la información facilitada previamente por el Gobierno y las fuentes, el Grupo de Trabajo decidió dar por esclarecido el caso relativo a Alvi Lechievich Khaiderkhanov, que, según la información recibida, se encuentra privado de libertad.

Observación

130. En cuanto a los casos pendientes del Cáucaso Septentrional, el Grupo de Trabajo recuerda al Gobierno de la Federación de Rusia su obligación humanitaria de buscar y localizar a las personas desaparecidas o sus restos, lo que incluye la identificación de los restos y su restitución a los familiares, con el debido respeto a las costumbres culturales.

A este respecto, las autoridades de la Federación de Rusia deben adoptar las medidas necesarias para elaborar y aplicar una estrategia con plazos concretos para el proceso de búsqueda.

131. En relación con los casos pendientes de desaparición de coreanos de Sajalín, el Grupo de Trabajo insta a las autoridades locales y federales de la Federación de Rusia a que localicen los lugares de sepultura en Sajalín, identifiquen los restos de estas personas y los restituyan a sus familiares en la República de Corea.

132. A este respecto, el Grupo de Trabajo considera que el derecho a la verdad es tanto un derecho colectivo como individual. Toda víctima tiene derecho a conocer la verdad sobre las violaciones que le afectan, pero la verdad debe comunicarse también a la sociedad como una salvaguardia fundamental contra la repetición de tales violaciones. Por lo tanto, es esencial que los archivos, incluidos los militares, se abran y se pongan a disposición del público, incluidos los familiares de los desaparecidos.

133. El Grupo de Trabajo espera que el Gobierno responda pronto de forma positiva a su solicitud de visita al país, transmitida el 19 de febrero de 2013, y a sus recordatorios posteriores.

Rwanda

Procedimiento de acción urgente

134. El Grupo de Trabajo, con arreglo a su procedimiento de acción urgente, transmitió al Gobierno un caso relativo a Venant Abayisenga, ciudadano de Rwanda presuntamente secuestrado el 6 de mayo de 2020 alrededor de las 16.00 horas cerca de su lugar de residencia.

Carta de denuncia conjunta

135. El 30 de septiembre de 2020, el Grupo de Trabajo transmitió, junto con el Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, una carta de denuncia relativa a Paul Rusesabagina, quien, según se informa, ha sido trasladado por la fuerza de Dubai a Kigali en circunstancias inciertas, y se encuentra actualmente detenido en Rwanda, acusado de delitos relacionados con el terrorismo.

Arabia Saudita

Procedimiento ordinario

136. El Grupo de Trabajo, con arreglo a su procedimiento ordinario, transmitió al Gobierno tres casos (véase el anexo I).

Serbia

Procedimiento ordinario

137. El Grupo de Trabajo, con arreglo a su procedimiento ordinario, transmitió al Gobierno el caso relativo a Šimun Marojević, presuntamente secuestrado y ejecutado el 20 de junio de 1992 durante el conflicto de Bosnia y Herzegovina por una milicia armada afiliada a los servicios de seguridad e inteligencia de la República Federativa de Yugoslavia. Según se informa, se desconoce dónde se encuentran sus restos.

138. De conformidad con sus métodos de trabajo, el Grupo de Trabajo decidió remitir una copia del expediente del caso al Gobierno de Bosnia y Herzegovina y al Gobierno de Croacia.

Sri Lanka

Procedimiento ordinario

139. El Grupo de Trabajo, con arreglo a su procedimiento ordinario, transmitió al Gobierno 56 casos (véase el anexo I).

Información facilitada por el Gobierno

140. El 20 de julio de 2020, el Gobierno de Sri Lanka transmitió información sobre 32 casos pendientes, pero esta se consideró insuficiente para darlos por esclarecidos.

Carta de denuncia conjunta

141. El 4 de junio de 2020, el Grupo de Trabajo transmitió, junto con otros mecanismos de procedimientos especiales, una carta de denuncia sobre el papel que, según se informa, desempeñaron la empresa Keenie Meenie Services y los nacionales del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte empleados o contratados por ella en las violaciones del derecho internacional humanitario y del derecho internacional de los derechos humanos presuntamente cometidas durante el conflicto armado de Sri Lanka entre 1984 y 1988, y sobre la consiguiente falta de rendición de cuentas y de recursos para las víctimas.

República Árabe Siria

Procedimiento ordinario

142. El Grupo de Trabajo, con arreglo a su procedimiento ordinario, transmitió al Gobierno ocho casos (véase el anexo I).

Esclarecimiento basado en la información facilitada por las fuentes

143. Sobre la base de la información facilitada previamente por las fuentes, el Grupo de Trabajo decidió dar por esclarecido el caso relativo a Hadi Al Zuhuri, quien, según la información recibida, había sido puesto en libertad.

Observación

144. El Grupo de Trabajo sigue recibiendo informes alarmantes sobre los casos de intimidación y represalias contra los parientes de personas desaparecidas por sus legítimas indagaciones sobre la suerte y el paradero de sus familiares desaparecidos. El Grupo de Trabajo pide al Gobierno de la República Árabe Siria que vele por que todos los que participen en la investigación de casos de desaparición forzada, incluidos los denunciantes, sus familiares, los abogados y los testigos, estén protegidos de todo maltrato y todo acto de intimidación o represalia, como se dispone en el artículo 13 de la Declaración sobre la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas. A este respecto, el Grupo de Trabajo pide al Gobierno que adopte las medidas necesarias para proteger a los familiares de los desaparecidos de represalias dirigidas contra ellos, y que defienda sus derechos básicos a la verdad, la justicia, la reparación y la memoria.

145. El Grupo de Trabajo reitera su petición a las autoridades de la República Árabe Siria de que pongan fin de inmediato a las desapariciones forzadas e impidan que se produzcan; busquen y localicen a las víctimas; realicen investigaciones transparentes, independientes y eficaces de esos abusos, con particular interés en los fallecimientos notificados de personas recluidas; exijan responsabilidades a los autores; y proporcionen reparación a las familias de los desaparecidos.

Tailandia

Llamamientos urgentes conjuntos y respuesta

146. El 12 de junio y el 15 de julio de 2020, el Grupo de Trabajo transmitió, junto con otros mecanismos de procedimientos especiales, llamamientos urgentes en relación con el presunto secuestro y desaparición forzada en Camboya de un nacional de Tailandia, Wanchalearm Satsaksit, y la falta de progresos en la investigación.

147. El 11 de agosto de 2020, el Gobierno de Tailandia respondió a los llamamientos urgentes.

Turquía

Información facilitada por el Gobierno

148. El 20 de julio de 2020, el Gobierno de Turquía transmitió información sobre siete casos pendientes, pero esta se consideró insuficiente para darlos por esclarecidos.

Esclarecimiento

149. Sobre la base de la información facilitada previamente por el Gobierno, el Grupo de Trabajo decidió dar por esclarecidos dos casos, relativos a Turgut Capan, quien al parecer se encuentra privado de libertad, y a Birlik Abdalbaki, presuntamente fallecido.

Carta de denuncia conjunta

150. El 10 de julio de 2020, el Grupo de Trabajo transmitió, junto con otros mecanismos de procedimientos especiales, una carta de denuncia relativa a la detención de un defensor de los derechos humanos y su posible extradición a la República Islámica del Irán, donde puede correr el riesgo de ser objeto de desaparición forzada.

Observaciones

151. El Grupo de Trabajo exhorta al Gobierno de Turquía a que atienda sin demora las recomendaciones formuladas tras la visita del Grupo de Trabajo al país, cuya puesta en práctica se evaluó en su reciente informe de seguimiento (A/HRC/45/13/Add.4). De conformidad con sus obligaciones humanitarias, Turquía debería establecer un mecanismo de búsqueda específico e independiente en estrecha coordinación con los familiares de los desaparecidos. Durante este proceso, el Grupo de Trabajo ha recomendado que las autoridades consideren la posibilidad de emprender iniciativas independientes dirigidas por la sociedad civil, como estudios destinados a cartografiar lugares de sepultura en toda Turquía.

152. El Grupo de Trabajo reitera que la conclusión o suspensión de una investigación penal relativa a una presunta desaparición forzada no exime al Gobierno de Turquía de su obligación de buscar, localizar e identificar a la persona desaparecida o sus restos, lo que incluye su restitución a los familiares, con el debido respeto a las costumbres culturales.

153. El Grupo de Trabajo mantiene su compromiso de prestar asistencia técnica al Gobierno para que cumpla sus obligaciones humanitarias y de derechos humanos en el marco de la erradicación de las desapariciones forzadas y la protección de los derechos a la verdad, la justicia, la memoria y la reparación.

Ucrania

Información facilitada por el Gobierno

154. El 20 de julio de 2020, el Gobierno de Ucrania transmitió información sobre cinco casos pendientes, pero esta se consideró insuficiente para darlos por esclarecidos.

Aplicación de la norma de los seis meses

155. El 22 de septiembre de 2020, el Gobierno facilitó información sobre cuatro casos pendientes, sobre cuya base el Grupo de Trabajo decidió aplicar a esos casos la norma de los seis meses.

Información facilitada por un actor no estatal

156. El 13 de julio de 2020, representantes de la autoproclamada República Popular de Donetsk facilitaron información sobre cuatro casos pendientes, pero esta se consideró insuficiente para darlos por esclarecidos³.

Emiratos Árabes Unidos

Esclarecimiento basado en la información facilitada por las fuentes

157. Sobre la base de la información proporcionada por las fuentes, el Grupo de Trabajo decidió dar por esclarecido el caso de Sheikha Latifa Mohammed Al Maktoum, quien al parecer se encuentra recluida en régimen de incomunicación en su domicilio de Dubai.

Discontinuación

158. El Grupo de Trabajo decidió, excepcionalmente y con arreglo a lo dispuesto en el párrafo 28 de sus métodos de trabajo, suspender el examen de dos casos pendientes, relativos a Eliana Massiel Domingues Cid y a un niño. No obstante, los casos pueden reabrirse en cualquier momento.

Llamamiento urgente conjunto

159. El 15 de julio de 2020, el Grupo de Trabajo transmitió, junto con otros mecanismos de procedimientos especiales, un llamamiento urgente relativo a 20 exdetenidos en la Bahía de Guantánamo, que fueron reasentados en los Emiratos Árabes Unidos entre noviembre de 2015 y enero de 2017 y permanecieron privados de libertad, sin juicio ni cargos.

Carta de denuncia conjunta

160. El 14 de julio de 2020, el Grupo de Trabajo transmitió, junto con otros mecanismos de procedimientos especiales, una carta de denuncia relativa a un ciudadano del Yemen residente en la Arabia Saudita, detenido en un puesto de control en el Yemen, internado en centros de reclusión no oficiales y presuntamente torturado e intimidado por las fuerzas del Yemen y sus aliados.

161. El 30 de septiembre de 2020, el Grupo de Trabajo transmitió, junto con mecanismos de procedimientos especiales, una carta de denuncia relativa a Paul Rusesabagina, quien, según se informa, ha sido trasladado por la fuerza de Dubai a Kigali en circunstancias inciertas, y se encuentra actualmente detenido en Rwanda, acusado de delitos relacionados con el terrorismo.

Observación

162. El Grupo de Trabajo está profundamente preocupado por las denuncias que ha recibido de detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas en centros de reclusión clandestinos situados en el Yemen y administrados por las autoridades de los Emiratos Árabes Unidos. Según se informa, en el contexto del conflicto armado y la crisis humanitaria del Yemen, cuyo inicio se remonta a 2015, se han llevado a cabo detenciones arbitrarias, y a las personas afectadas no se les ha informado de los motivos de su detención, se les ha negado el acceso a abogados o a un juez y se les ha mantenido recluidas en régimen de

³ Los casos se transmitieron tras anunciar el Grupo de Trabajo, en septiembre de 2019, que comenzaría a documentar las vulneraciones equivalentes a actos de desaparición forzada perpetrados por agentes no estatales (A/HRC/42/40, párr. 94).

incomunicación durante períodos prolongados o indefinidos, lo que equivale a una desaparición forzada. Al parecer, estas violaciones de los derechos humanos se han perpetrado bajo el pretexto de operaciones de lucha contra el terrorismo realizadas por agentes de los Emiratos Árabes Unidos y del Yemen, que actuaban en cooperación.

163. A este respecto, el Grupo de Trabajo recuerda las disposiciones de la Declaración sobre la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, en la que se establece que los Estados tomarán medidas legislativas, administrativas, judiciales y otras medidas eficaces para prevenir o erradicar los actos de desapariciones forzadas en cualquier territorio sometido a su jurisdicción (art. 3); la obligación de tipificar la desaparición forzada como delito específico (art. 4); que ninguna circunstancia, cualquiera que sea, puede ser invocada para justificar las desapariciones forzadas (art. 7); que toda persona privada de libertad deberá ser mantenida en lugares de detención oficialmente reconocidos y, con arreglo a la legislación nacional, presentada sin demora ante una autoridad judicial luego de la aprehensión (art. 10); el derecho a denunciar los hechos ante una autoridad estatal competente e independiente, la cual procederá de inmediato a hacer una investigación exhaustiva e imparcial (art. 13); y la prohibición de conceder amnistías o u otras medidas análogas que tengan por efecto exonerar de cualquier procedimiento o sanción penal a los autores o presuntos autores de actos de desaparición forzada (art. 18).

Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte

Carta de denuncia conjunta y respuesta

164. El 4 de junio de 2020, el Grupo de Trabajo transmitió, junto con otros mecanismos de procedimientos especiales, una carta de denuncia sobre el papel desempeñado por la empresa Keenie Meenie Services y los nacionales del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte empleados o contratados por ella en las violaciones del derecho internacional humanitario y del derecho internacional de los derechos humanos presuntamente cometidas durante el conflicto armado en Sri Lanka entre 1984 y 1988, y sobre la consiguiente falta de rendición de cuentas y de recursos para las víctimas.

165. El 2 de agosto de 2020, el Gobierno respondió a la carta de denuncia conjunta.

Estados Unidos de América

Llamamiento urgente conjunto

166. El 15 de julio de 2020, el Grupo de Trabajo transmitió, junto con otros mecanismos de procedimientos especiales, un llamamiento urgente relativo a 20 exdetenidos en la Bahía de Guantánamo, que fueron reasentados en los Emiratos Árabes Unidos entre noviembre de 2015 y enero de 2017 y permanecieron privados de libertad, sin juicio ni cargos.

Cartas de denuncia conjuntas

167. El 14 de julio de 2020, el Grupo de Trabajo transmitió, junto con otros mecanismos de procedimientos especiales, una carta de denuncia relativa a un nacional del Yemen residente en la Arabia Saudita, que fue detenido en un puesto de control en el Yemen, sometido a desaparición forzada durante su privación de libertad, del 19 de mayo al 25 de junio de 2018, en centros de reclusión no oficiales, y presuntamente torturado e intimidado por las fuerzas del Yemen y de los Emiratos Árabes Unidos. Según la información recibida, agentes de inteligencia de los Estados Unidos participaron en el interrogatorio extraterritorial.

168. El 27 de julio de 2020, el Grupo de Trabajo transmitió, junto con otros mecanismos de procedimientos especiales, una carta de denuncia sobre la detención en régimen de incomunicación, las torturas y los malos tratos que al parecer sufrió Mohammed Abdullah Saleh al-Asad en la República Unida de Tanzania, y posteriormente en Djibouti, en el Afganistán y en el Yemen, en el marco del programa de entregas extrajudiciales llevado a cabo por los Estados Unidos de América. La carta también se refería a Zahra Ahmed

Mohamed, su esposa, quien supuestamente padeció las consecuencias psicológicas de no tener ninguna información sobre la suerte o el paradero de su marido.

Viet Nam

Respuesta a una carta de denuncia conjunta

169. El 26 de mayo de 2020, el Gobierno transmitió una respuesta a la carta de denuncia conjunta enviada el 31 de marzo de 2020 en relación con la presunta detención arbitraria y posible desaparición forzada de Truong Thi Ha mientras cruzaba la frontera con Viet Nam, en lo que parece ser un acto de represalia por sus actividades en defensa de los derechos humanos.

Venezuela (República Bolivariana de)

Procedimiento de acción urgente

170. El Grupo de Trabajo, con arreglo a su procedimiento de acción urgente, transmitió al Gobierno dos casos relativos a:

- a) Leonardo David Chirinos Parra, presuntamente desaparecido el 21 de abril de 2020 en la ciudad de Maracaibo, estado Zulia, después de que agentes de la Dirección General de Contrainteligencia Militar asignados al cuartel general de Boleíta lo detuvieran;
- b) José Antonio Zamora Uriana, presuntamente secuestrado en la Base Naval Mariscal Juan Crisóstomo Falcón en la ciudad de Punto Fijo, estado Falcón, el 7 de mayo de 2020.

Información facilitada por el Gobierno

171. Las fuentes facilitaron información sobre un caso pendiente, pero esta se consideró insuficiente para darlo por esclarecido.

Carta de denuncia conjunta

172. El 14 de septiembre de 2020, el Grupo de Trabajo transmitió, junto con otros mecanismos de procedimientos especiales, una carta de denuncia relativa a la desaparición de al menos 73 migrantes, incluidas posibles víctimas de trata, que se dirigían de la República Bolivariana de Venezuela a la isla de Curazao y a Trinidad y Tabago en tres embarcaciones diferentes entre abril y julio de 2019.

Yemen

Procedimiento de acción urgente

173. El Grupo de Trabajo, con arreglo a su procedimiento de acción urgente, transmitió al Gobierno un caso relativo a Redwan Al Hashidi, presuntamente detenido el 8 de julio de 2020 por los servicios de seguridad yemeníes en el aeropuerto de Say'un Hadramawt tras una supuesta deportación de Egipto.

174. De conformidad con sus métodos de trabajo, el Grupo de Trabajo remitió una copia del expediente del caso al Gobierno de Egipto.

Procedimiento ordinario

175. El Grupo de Trabajo anunció que, a partir de septiembre de 2019, comenzaría a documentar las vulneraciones equivalentes a actos de desaparición forzada perpetrados por agentes no estatales (A/HRC/42/40, párr. 94). En consecuencia, durante el período de sesiones examinó cuatro casos equivalentes a desapariciones forzadas, presuntamente

perpetradas en el territorio controlado por las autoridades *de facto* de Saná⁴. Con arreglo a su procedimiento ordinario, el Grupo de Trabajo transmitió a las autoridades *de facto* de Saná los casos relativos a:

- a) Abkr Barakhli, secuestrado según se informa el 16 de marzo de 2016, en Hudayda, por un grupo armado presuntamente afiliado a las autoridades *de facto* de Saná;
- b) Ghazali Mahdabi, secuestrado según se informa el 15 de octubre de 2015 en la calle, en Hudayda, por un grupo armado presuntamente afiliado a las autoridades *de facto* de Saná;
- c) Tariq Khalaf, secuestrado según se informa el 18 de marzo de 2016 en su domicilio de Al-Qamaria, por un grupo armado presuntamente afiliado a las autoridades *de facto* de Saná;
- d) Omar al-Shareef, secuestrado según se informa el 2 de enero de 2016 en su domicilio de la localidad de Ahmed Sagheer por un grupo armado presuntamente afiliado a las autoridades *de facto* de Saná.

Carta de denuncia conjunta

176. El 14 de julio de 2020, el Grupo de Trabajo transmitió, junto con otros mecanismos de procedimientos especiales, una carta de denuncia relativa a un ciudadano del Yemen residente en la Arabia Saudita, que fue detenido en un puesto de control en el Yemen y recluido en centros de privación de libertad no oficiales entre el 19 de mayo y el 25 de junio de 2018, donde fue presuntamente torturado por las fuerzas del Yemen y sus aliados.

Zimbabwe

Carta de denuncia conjunta y respuesta

177. El 2 de junio de 2020, el Grupo de Trabajo transmitió, junto con otros mecanismos de procedimientos especiales, una carta de denuncia relativa a la detención arbitraria, la desaparición, las torturas y los malos tratos sufridos por Joannah Mamombe, Cecelia Chimbiri y Netsai Marowa, miembros de la Asamblea Juvenil de la Alianza MDC, entre el 13 y el 15 de mayo de 2020.

178. El 16 de junio de 2020, el Gobierno respondió a la carta de denuncia conjunta.

⁴ El Grupo de Trabajo destaca que los casos remitidos a las autoridades *de facto* de Saná no implican en absoluto juicio alguno sobre el estatuto jurídico de territorios, ciudades o zonas, o de sus autoridades.

Annex I

Standard procedure cases

Afghanistan

1. The Working Group transmitted 9 cases to the Government, concerning:
 - (a) Ezzatullah, allegedly arrested in November 2017 by police officers from his residence in Kandahar city;
 - (b) Aminullah Rafiqi allegedly arrested on 16 March 2019 from his residence in Kandahar city, by members of the special unit of the National Directorate of Security (NDS03);
 - (c) Shafiullah allegedly abducted on 24 October 2016 from his shop in Kandahar city by two armed men believed to be plainclothes police officers;
 - (d) Sayed Mohamad, allegedly arrested on 26 September 2016 from his residence in Kandahar city by police officers;
 - (e) Ahmad Khan, allegedly arrested on 4 September 2017 from his shop in Kandahar city by armed men believed to be members of a police special unit;
 - (f) Sayed Ibrahim Hashimi allegedly disappeared on 12 June 2016 from Rig detention facility in Dan District, Kandahar;
 - (g) Gulalai, allegedly arrested on 8 December 2015 from his shop in Kandahar, by the police;
 - (h) Fazel Rahman, allegedly arrested on 28 June 2015 from his shop in Kandahar City by police officers;
 - (i) Mohibullah, allegedly arrested on 15 March 2014 from his shop in Kandahar city by police officers.

Bangladesh

2. The Working Group transmitted 2 cases to the Government, concerning:
 - (a) Ansar Ali Ali, allegedly abducted on 18 April 2012, from Dhaka by armed men believed to be state agents;
 - (b) Saidur Rahman Kazi, allegedly arrested from Jessore Municipality Park on 5 April 2017 by police officers.

China

3. The Working Group transmitted 52 cases to the Government, concerning:
 - (a) Tajiguli Wufuer, allegedly disappeared in 2017 or 2018. It is believed she was taken to a re-education facility;
 - (b) Reyihanguli Reman, allegedly disappeared in 2017 or 2018. It is believed she was taken to a re-education facility;
 - (c) Mieradili Abulaiti allegedly arrested in August 2017, from Kashgar city, Xinjiang, by Chinese police officers wearing uniforms;
 - (d) Tuerxun Suliye disappeared in 201. It is believed she was taken to a re-education facility;

- (e) Lhadar, allegedly arrested on 8 October 2019 in his village in Nagchu (Naqu) County, Nagchu Prefecture by local police;
- (f) Norsang allegedly arrested at the end of September in 2019 in Nagchu (Naqu) County, Nagchu Prefecture by local police;
- (g) Imamu Tuoheti allegedly disappeared in 2017 or 2018. It is believed she was taken to a re-education facility;
- (h) Nur Maimaiti Imamu allegedly disappeared in 2017 or 2018. It is believed he was taken to a re-education facility;
- (i) Nur Amina Imamu, allegedly disappeared in 2017 or 2018. It is believed she was taken to a re-education facility;
- (j) Rukeya Imamu, allegedly disappeared in 2017 or 2018. It is believed she was taken to a re-education facility;
- (k) Saidula Tuoheti, allegedly disappeared in 2017 or 2018. It is believed he was taken to a re-education facility;
- (l) Reziwanguli Maimaiti, allegedly disappeared in 2017 or 2018. It is believed she was taken to a re-education facility;
- (m) Haisiteli Ahong, allegedly disappeared in 2017 or 2018. It is believed he was taken to a re-education facility;
- (n) Yidiresi Ahon, allegedly disappeared in 2017 or 2018. It is believed he was taken to a re-education facility;
- (o) Denaguli Ahong, allegedly disappeared in 2017 or 2018. It is believed she was taken to a re-education facility;
- (p) Kasimujiang Ahong, allegedly disappeared in 2017 or 2018. It is believed he was taken to a re-education facility;
- (q) Yiheya Bawudung, allegedly disappeared in 2017 or 2018. It is believed he was taken to a re-education facility;
- (r) Zuorigul Bwaudung, allegedly disappeared in 2017 or 2018. It is believed she was taken to a re-education facility;
- (s) Ayixiamuguli Bwaudung, allegedly disappeared in 2017 or 2018. It is believed she was taken to a re-education facility;
- (t) Wufuerjiang Bawudung, allegedly disappeared in 2017 or 2018. It is believed he was taken to a re-education facility;
- (u) Omarjiang Abudurexiti, allegedly disappeared in 2017 or 2018. It is believed he was taken to a re-education facility;
- (v) Najibula Abulaiti, allegedly disappeared on 20 February 2018 after being summoned to a police station in Kashgar;
- (w) Maimaitiming Reman, allegedly disappeared in 2017 or 2018. It is believed he was taken to a re-education facility;
- (x) Abuduwaili Reman, allegedly disappeared in 2017 or 2018. It is believed he was taken to a re-education facility;
- (y) Alimujiang Mamutijiang, allegedly disappeared in 2017 or 2018. It is believed he was taken to a re-education facility;
- (z) Ayinuer Mamutijiang, allegedly disappeared in 2017 or 2018. It is believed she was taken to a re-education facility;
- (aa) Areziguli Reman, allegedly disappeared in 2017 or 2018. It is believed she was taken to a re-education facility;

- (bb) Maihemutijiang Kunahung, allegedly disappeared in 2017 or 2018. It is believed he was taken to a re-education facility;
- (cc) Guoyaguli Reman, allegedly disappeared in 2017 or 2018. It is believed she was taken to a re-education facility;
- (dd) Nurmaimaiti Aizizi, allegedly disappeared in 2017 or 2018. It is believed he was taken to a re-education facility;
- (ee) Rusitaimujiang Aizizi, allegedly disappeared in 2017 or 2018. It is believed he was taken to a re-education facility;
- (ff) Wusimanjiang Maimaiti, allegedly disappeared in 2017 or 2018. It is believed he was taken to a re-education facility;
- (gg) Buheliqiemu Maimaiti, allegedly disappeared in 2017 or 2018. It is believed he was taken to a re-education facility;
- (hh) Aihemaitijiang Kunahung, allegedly disappeared in 2017 or 2018. It is believed he was taken to a re-education facility;
- (ii) Aini Maimaiti, allegedly disappeared in 2017 or 2018. It is believed he was taken to a re-education facility;
- (jj) Reyihanguli Abudurexiti, allegedly disappeared in 2017 or 2018. It is believed she was taken to a re-education facility;
- (kk) Busala Maimaittuersun, allegedly disappeared in 2017 or 2018. It is believed she was taken to a re-education facility;
- (ll) Abudourezake Maimaittuersun, allegedly disappeared in 2017 or 2018. It is believed he was taken to a re-education facility;
- (mm) Maimaitiming Maimaittuersun, allegedly disappeared in 2017 or 2018. It is believed he was taken to a re-education facility;
- (nn) Haisiteli Abudurexiti, allegedly disappeared in 2017 or 2018. It is believed he was taken to a re-education facility;
- (oo) Alimu Hashani, allegedly was arrested in August 2018 in Beijing by the police;
- (pp) Mamat Abdullah arrested on 29 April 2017 from Urumqi City, Xinjiang, by Security Administration Police;
- (qq) Nuerbiya Mamutijiang, allegedly disappeared in 2017 or 2018. It is believed she was taken to a re-education facility;
- (rr) Kunahung Maimaiti, allegedly disappeared in 2017 or 2018. It is believed he was taken to a re-education facility;
- (ss) Hushtar Eysa, allegedly disappeared in 2017. It is believed he was taken to a re-education facility;
- (tt) Yalkun Isa, allegedly disappeared in 2017;
- (uu) Ailijiang Mamuti, allegedly arrested in May 2017;
- (vv) Ametjan Abdurashid, allegedly last seen in late 2016 at Kashgar City People's Court;
- (ww) Abdukahar Ebeydulla, allegedly detained in 2016 by the Police;
- (xx) Yakefu Niyazi, allegedly arrested in June 2017 in arrested in Xinhe (Toqsu) Country, Akesu (Aqsu) Prefecture, Xinjiang;
- (yy) Hairiguli Niyazi, arrested in August 2017 in Urumqi;
- (zz) Yusufu Niyazi, seen in August 2016 in detention in Tumshuq, Xinjiang.

Democratic People's Republic of Korea

4. The Working Group transmitted 12 cases to the Government, concerning:

(a) Ki-Yeong Jang, allegedly abducted on 11 December 1969 after Korean Air Lines flight YS-11 was hijacked by an agent associated with the security services of the Democratic People's Republic of Korea;

(b) Gyeong-Suk Jeong, allegedly abducted on 11 December 1969 after Korean Air Lines flight YS-11 was hijacked by an agent associated with the security services of the Democratic People's Republic of Korea;

(c) Hyuk-geun Kwon, allegedly abducted on 11 December 1969 after Korean Air Lines flight YS-11 was hijacked by an agent associated with the security services of the Democratic People's Republic of Korea;

(d) Jong-soon Kim, allegedly abducted on 11 December 1969 after Korean Air Lines flight YS-11 was hijacked by an agent associated with the security services of the Democratic People's Republic of Korea;

(e) Ki-Ha Lee, allegedly abducted on 8 August 1975 by the Democratic People's Republic of Korea forces while on board a fishing boat;

(f) Ki-sik Min, allegedly abducted on 8 August 1975 by the Democratic People's Republic of Korea forces while on board a fishing boat;

(g) Kyung-soo Kim, allegedly abducted on 20 November 1965 by the Democratic People's Republic of Korea authorities when arriving by accident to Chanjon Port;

(h) Sang-won Lee, allegedly abducted on 29 May 1968 by the Democratic People's Republic of Korea forces while on board a fishing boat;

(i) Soon-chul Ko, allegedly abducted on 7 November 1968 by the Democratic People's Republic of Korea forces while on board a fishing boat;

(j) Sung-ryong Lee, allegedly abducted on 15 February 1974 by the Democratic People's Republic of Korea forces while on board a fishing boat;

(k) Yi-deuk Kim, allegedly abducted on 30 October 1968 by the Democratic People's Republic of Korea forces while on board a fishing boat;

(l) Young-chun Hwang, allegedly abducted on 25 December 1971 by the Democratic People's Republic of Korea forces while on board a fishing boat.

Egypt

5. The Working Group transmitted 6 cases to the Government, concerning:

(a) Mr. Mohamed Salah Ahmed Mohamed Bayoumi, an Egyptian citizen born on 1 July 1987, allegedly abducted on 3 January 2020 in front of his home by security forces in plainclothes and uniforms;

(b) Mahmoud Ali, an Egyptian citizen born on 12 October 1998, allegedly arrested on 22 March 2020 from his home located in El-Iraqy village, Abo-Hammad centre, Sharqia governorate, Egypt by Police officers in uniform and National Security agents in civilian clothes;

(c) Mr. Mohamed Hadeya, an Egyptian teacher born on 13 July 1988, allegedly arrested on 22 December 2019 at his home located in Cairo Governorate by masked State Security agents;

(d) Assem Ahmed Abdul Hameed Amin, a 25 years old Egyptian citizen, allegedly arrested on 5 March 2018 from Al-Sarraj Mall by security forces both in uniform and plainclothes;

(e) Yousif Mohamed Mahmoud Amin, an Egyptian citizen born on 15 June 1998, allegedly arrested on 3 November 2019 from his home in Cairo by police forces in uniforms and plainclothes;

(f) Darwish Abd El-Hafiz, an Egyptian citizen born on 3 February 1988, allegedly arrested on 27 October 2018 in front of his home, in 6th of October City, by National Security Agents.

India

6. The Working Group transmitted 9 cases to the Government, concerning:

(a) Abdul Khaliq Mir, allegedly last seen on 16 October 2000 in Yatipora Headquarters of the army;

(b) Ghulam Mohammad Thachoo, allegedly last seen on 24 November 2005 in Mahu camp, Mirpur, Jammu and Kashmir;

(c) Ghulam Nabi Butt, allegedly disappeared on 20 August 2002 while on his way to Khadi, Adpinchla, Banihal. It is believed that the Army was responsible for his disappearance;

(d) Irshad Amin Khan, allegedly disappeared on 17 December 2004 after going to the Army headquarters in Srinagar;

(e) Jalaluddin Hajam, allegedly disappeared on 15 August 2000 near Naidiki village. It is believed the Army was responsible for his disappearance;

(f) Mehraj-ud Din, allegedly abducted on 20 August 1999 from Baramulla District by members of the Indian army;

(g) Mohammad Akbar Rather, allegedly abducted on 28 November 1996 from his residence in Baramulla District by members of the Indian army;

(h) Mohammad Sharief Wani, allegedly abducted in 2000 by the personnel of 12 Rashtriya Rifles;

(i) Nazir Ahmad Gojjar, allegedly abducted near his residence in Bandipora District, on 26 January 1992 by the Dogra Regiment of the Army.

Iran (Islamic Republic of)

7. The Working Group transmitted 4 cases to the Government, concerning:

(a) Mansouri Abdollah, allegedly arrested in Nezam Abad Street in Tehran in June-July 1981 by state security forces, imprisoned since then, and last seen on 16 October 2000 in Yatipora Headquarters of the army;

(b) Nafiseh Rouhani, allegedly arrested at Falake Khomeini (aka Khomeini Square) in Mashhad on 18 August 1988 by agents of Iranian Security services;

(c) Ahmad Behtash, allegedly arrested at the home of a person associated with him in Dowlat Avenue in Tehran on the evening of 23 or 26 July 1986 by agents of the Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) dressed in uniform;

(d) Abbas-Ali Monshi Roudsari, allegedly arrested in his home on 31 July 1986 by security forces from the Revolutionary Committees or the Ministry of Intelligence.

Pakistan

8. The Working Group transmitted 37 cases to the Government, concerning:

- (a) Noor Dad Nil, allegedly abducted on 29 November 2019 in Ormara, district Gwadar, Balochistan by Pakistani Navy while returning home;
- (b) Usman Usman, allegedly abducted on 16 August 2012 from the Inayat Kalay Bazar (Market) in Tehsil Khar by the Pakistani Army and military secret service;
- (c) Muhammad Maqsood Kiyani Nill, allegedly abducted on 22 September 2017 in Doli Tehsil Bagh by members of a secret agency, possibly from the Military Intelligence (MI), the Inter-services Intelligence (ISI) or the Central Intelligence Agency (CIA) while returning home from Muzaffarabad;
- (d) Umar Safdar Nill, allegedly abducted on 28 January 2016 by three men of a secret agency, possibly from the Military Intelligence (MI), the Inter-services Intelligence (ISI) or the Central Intelligence Agency (CIA) who broke into his house at 5:30 p.m.;
- (e) Muhammad Waseem, allegedly abducted in his temporal residence at Street no 11, Golra Railway station, Islamabad, on 10 March 2018 by members of a secret agency, possibly from the Military Intelligence (MI), the Inter-services Intelligence (ISI) or the Central Intelligence Agency (CIA);
- (f) Ansar Ahmad Khan Nill, allegedly abducted at 6:00 a.m. on 20 June 2014 from his residence at PO Malot, Chanat, Bagh District, Dhirkot, Azad Kashmir, by seven members of a secret agency, possibly from the Military Intelligence (MI), the Inter-services Intelligence (ISI) or the Central Intelligence Agency (CIA);
- (g) Nazir ul Islam Khan Nill, allegedly abducted in April 2011 by fifteen members of a secret agency, possibly from the Military Intelligence (MI), the Inter-services Intelligence (ISI) or the Central Intelligence Agency (CIA) while raveling from Rawalpindi to Gujarat in Punjab;
- (h) Ibrahim Shah Syed, allegedly abducted on 16 April 2015 at lunchtime by Pakistani Police. It is believed that Mr. Ibrahim Shah Syed is detained in an internment centre run by the Pakistani Army;
- (i) Insaf Ali Dayo, allegedly abducted on 29 May 2019 at 11 a.m. from his tailoring shop at Maghani Shopping Centre, Larkana, District Larkana, Sindh by police team from Police Station Rehmatpur, along with agents from the intelligence agency dressed in uniforms and in plainclothes in white Vigo vehicle and reportedly taken to Rahmarpur Police Station;
- (j) Mohammad Hassaan, allegedly abducted on 14 February 2020 at Qili Qambarani, Qambarani Road Quetta, Balochistan, by agents of the Inter-Service Intelligence ISI when buying household items;
- (k) Salman Ali Saleem, allegedly abducted in the early morning of 7 May 2019 during a raid by agents of the Frontier Constabulary (FC) while offloading diesel from his car in Bolo town of Mand, Balochistan;
- (l) Zakir Balochzahi, an Iranian national, allegedly abducted in October 2019 in Panjgur, district Panjgur, Balochistan, by agents of the Inter Service Intelligence ISI and reportedly taken into custody by intelligence officials from Chetkan town in Panjgur;
- (m) Irfan Khan, allegedly arrested on 15 July 2017 at a checkpoint between Dera Ismail Khan District, Khyber Pakhtunkhwa and the Punjab Province by agents of the police and secret services dressed in plainclothes and taken to an unknown location;
- (n) Ali Bakhtiyar, allegedly abducted on 13 February 2015 near Peer Umar Jan area of Panjgoor, Balochistan, by personnel of Frontier Corps (FC) and secret agencies of Pakistan;
- (o) Zia Ul Islam, allegedly arrested on 6 March 2015 in Islamabad by personnel of the Pakistani Secret Services dressed in plainclothes and driven to an unknown location;
- (p) Sheraz Khan allegedly abducted on 17 December 2018 in Khyber Agency, Peshawar, by agents of Pakistani Security agencies and military personnel;

(q) A minor, allegedly arrested on 14 April 2013 at the Student Welfare Hostel Danish Abad, Peshawar, Khyber Pakhtunkhwa, by agents of the Pakistani Military Service and reportedly driven to Sadda District Kurram Prison. It is believed that he is being held in an internment centre at Lakki Marwat district of Khyber Pakhtunkhwa run by Pakistan Army since 16 March 2019;

(r) Hassan Ali, allegedly abducted on 28 January 2010 from his residence at Mohala Kowz Plow Postoffice Zirakhaila Chungi Swat by members of a secret agency, possibly from the Military Intelligence (MI), the Inter-services Intelligence (ISI) or the Central Intelligence Agency (CIA);

(s) Mohabat Shah, allegedly abducted on 2 February 2014 from Korangi Industrial Area Bilal Kaloni Karachi by two members of a secret agency, possibly from the Military Intelligence (MI), the Inter-services Intelligence (ISI) or the Central Intelligence Agency (CIA) in plainclothes with Ranger vehicles while returning to his carriage;

(t) Arbistan, allegedly abducted on 2 October 2014 from Ashraf Road Balahasar Hashat Naghri Peshawar by members of a secret agency, possibly from the Military Intelligence (MI), the Inter-services Intelligence (ISI) or the Central Intelligence Agency (CIA) after exiting the mosque following the conclusion of Fajr prayers;

(u) Sarzameen Khan, allegedly abducted on 4 October 2014 from Ishrangri Pull Peshawar by members of a secret agency, possibly from the Military Intelligence (MI), the Inter-services Intelligence (ISI) or the Central Intelligence Agency (CIA) while working at Ashangari Bridge;

(v) Rehman Ullah, allegedly arrested on 25 April 2017 in his residence at Alingar, Tehsil Lakray, District Mohammed Agency by members of a secret agency, possibly from the Military Intelligence (MI), the Inter-services Intelligence (ISI) or the Central Intelligence Agency (CIA);

(w) Muhammad Shahbaz, allegedly abducted on 19 December 2014 from his residence near Fire Brigade Line No. 2 Mohala Sunare Town Faisalabad by 15 members of a secret agency, possibly from the Military Intelligence (MI), the Inter-services Intelligence (ISI) or the Central Intelligence Agency (CIA) in black uniforms;

(x) Muhammad Imran Khan, allegedly abducted on 7 October 2016 near his residence at PO Abbaspur, Polas, Tehsil Abbaspur, District Poonch Azad, Kashmir, by members of a secret agency, possibly from the Military Intelligence (MI), the Inter-services Intelligence (ISI) or the Central Intelligence Agency (CIA);

(y) Ali Khan, allegedly abducted on 5 September 2011 around 6:00 a.m. from room No. 6, 2nd floor of Amir Plaza, Dalazak road, Peshawar, by members of a secret agency, possibly from the Military Intelligence (MI), the Inter-services Intelligence (ISI) or the Central Intelligence Agency (CIA);

(z) Baloch Khan, allegedly arrested on 17 January 2019 around 5:00 a.m. in the house of a person associated with him in Balochabad Mand, District Kech, Balochistan, by Frontier Corps while he was sleeping when the house was raided by Pakistani military;

(aa) Nill Muslim, allegedly abducted on 4 May 2013 from a hospital in Turbat city, Kech, Balochistan, Pakistan by Pakistani Inter-Services Intelligence;

(bb) Hizbullah Nill, allegedly abducted on 14 February 2020 while walking along the main road in Qili Qambarani, Qambarani Road Quetta, Balochistan, along with a person associated with him by Pakistani Inter-Services Intelligence in two vehicles while they were buying groceries;

(cc) Jahanzaib Nill, allegedly abducted on 3 May 2016 from his residence in Qili Qambarani, Qambarani Road Quetta, Balochistan by agents of the Pakistani Inter-Services Intelligence accompanied by Frontier Corps;

(dd) Fazil Rehman, allegedly abducted on 20 May 2010 from his residence at Alankinar, Shinwari Bahadur Kaly Tehsil Apar Mohmand District Mohmand Agency by two

members of a secret agency, possibly from the Military Intelligence (MI), the Inter- services Intelligence (ISI) or the Central Intelligence Agency (CIA);

(ee) Talha Talha, allegedly arrested in 2014 in Peshawar City, Khyber Pakhtunkhwa, by agents of the secret service dressed in plainclothes and taken away in a car to an unknown destination;

(ff) Imran Satti, allegedly abducted on 28 August 2016 at 6:30 a.m. from Sanch Dak Khana Khas, Tehsil Muree, District Rawalpindi by members of a secret agency, possibly from the Military Intelligence (MI), the Inter-services Intelligence (ISI) or the Central Intelligence Agency (CIA);

(gg) Sadam Khan, allegedly abducted on 24 February 2017 at 06:30 p.m. from his residence at Dilazakh Road, Fatuabul Rahima, Peshawar by members of a secret agency, possibly from the Military Intelligence (MI), the Inter-services Intelligence (ISI) or the Central Intelligence Agency (CIA);

(hh) Arshad Ahmad, allegedly abducted on 21 May 2014 from Hanna Vally, near staff college, Quetta, Balochistan, by agents of the Pakistani military secret service;

(ii) Abdul Qadir, allegedly abducted on 5 May 2014 in front of Saleem Hotel at Kuchlagh Bazaar, Balochistan, by masked individuals suspected to belong to the Pakistani military intelligence;

(jj) Insaaf Ali Dabo, allegedly abducted on 28 May 2017 from Mulghai Centre, Nazar Muhalla Main Road, Centennial Hall, Larkana by three police officers in uniform and three individuals in plainclothes in a white Vigo car with a blue siren;

(kk) Hafiz Hassaan Akbar, allegedly abducted on 19 October 2015 from Faizan Plaza, Committee Chowk, Marri Road, Rawalpindi, by agents of the Counter-Terrorism Department connected with the Pakistani military secret service.

Russian Federation

9. The Working Group transmitted 23 cases to the Government, concerning:

(a) Yong-In Woo, was last heard from in a letter from South Sakhalin, located in the present day Russian Federation, in June 1950, just before the outbreak of the Korean War;

(b) I-Geun Kim, was last heard from in a letter from South Sakhalin, located in the present day Russian Federation, in June 1950, just before the outbreak of the Korean War;

(c) Yun-Gap Si, was last heard from in a letter from South Sakhalin, located in the present day Russian Federation, in June 1950, just before the outbreak of the Korean War;

(d) Ok-Dong Park, was last heard from in a letter from South Sakhalin, located in the present day Russian Federation, in June 1950, just before the outbreak of the Korean War;

(e) Young-Sul Park, was last heard from in a letter from South Sakhalin, located in the present day Russian Federation, in June 1950, just before the outbreak of the Korean War;

(f) Byeong-Seon Kim, was last heard from in a letter from South Sakhalin, located in the present day Russian Federation, in June 1950, just before the outbreak of the Korean War;

(g) Seong-Hak Park, was last heard from in a letter from South Sakhalin, located in the present day Russian Federation, in June 1950, just before the outbreak of the Korean War;

(h) Man-Dong Kim, was last heard from in a letter from South Sakhalin, located in the present day Russian Federation, in June 1950, just before the outbreak of the Korean War;

(i) Gui-Yong Yoo, was last heard from in a letter from South Sakhalin, located in the present day Russian Federation, in June 1950, just before the outbreak of the Korean War;

(j) Seong-I Baek, was last heard from in a letter from South Sakhalin, located in the present day Russian Federation, in June 1950, just before the outbreak of the Korean War;

(k) Seok-Nam Yoon, was last heard from in a letter from South Sakhalin, located in the present day Russian Federation, in June 1950, just before the outbreak of the Korean War;

(l) Gyu-Bong Kim, was last heard from in a letter from South Sakhalin, located in the present day Russian Federation, in June 1950, just before the outbreak of the Korean War;

(m) Sang-Mun Choi, was last heard from in a letter from South Sakhalin, located in the present day Russian Federation, in June 1950, just before the outbreak of the Korean War;

(n) Ok-Seong Bae, was last heard from in a letter from South Sakhalin, located in the present day Russian Federation, in June 1950, just before the outbreak of the Korean War;

(o) Yun-Ok Do, was last heard from in a letter from South Sakhalin, located in the present day Russian Federation, in June 1950, just before the outbreak of the Korean War;

(p) Sergei Remenyuk, allegedly abducted on 15 June 2016 by armed groups associated with the self-proclaimed 'Donetsk people's republic' in the area of Mnogopolye, Donetsk. It is reported that he was transferred to the city of Rostov in the territory of the Russian Federation shortly after the abduction⁵;

(q) Adam Medov, allegedly arrested on 15 June 2004 by a group of armed men associated with the Federal Security Service in Karabulak;

(r) Sayd-Salekh Ibragimov, allegedly arrested on 20 October 2009 by special agents of the Ministry of the Interior during a raid on his house in Goyty village;

(s) Khizir Tepsurkayev, allegedly arrested on 27 August 2001 by a group of Russian servicemen from military unit no. 6779 that was participating in a special operation in Urus-Martan;

(t) Aindi Dzhabayev, allegedly arrested on 8 September 2002 by armed military officers in a raid on his home in Urus Martan;

(u) Dzhamalayl Yanayev, allegedly arrested on 28 December 2004 at Beslan Airport by two armed men wearing camouflage uniforms allegedly affiliated with the Regional Department for Combating Organized Crime;

(v) Adam Didayev, allegedly arrested on 6 December 2001 by approximately 20 armed masked men in camouflage uniforms in a raid on his house in Gekhi;

(w) Moul Usumov, allegedly arrested on 30 June 2001 by around 20 armed servicemen in camouflage uniforms with dogs during a raid on his house in Kurchaloy.

Saudi Arabia

10. The Working Group transmitted three cases to the Government, concerning:

(a) Mohammad Ali Saghir Manea, a Yemeni citizen, allegedly abducted from the streets of Jizan in Saudi Arabia on 21 December 2015 by the military police;

(b) Suleiman Ali Hussein Salim Suleiman, a Yemeni citizen, allegedly abducted from the streets of Jizan in Saudi Arabia on 21 December 2015 by the military police;

⁵ In accordance with its methods of work, the Working Group transmitted a copy of the case to the Government of Ukraine and the self-proclaimed 'Donetsk people's republic' as a non-State actor. The Working Group stresses that the case addressed to the self-proclaimed 'Donetsk people's republic' does not in any way imply the expression of any opinion concerning the legal status of any territory, city or area, or of its authorities.

(c) Mohd Monzer Al Imam, a Syrian citizen, allegedly arrested between his place of residence and his workplace at Hashem contracting & trading in 3225 Turki Ibn Abdullah Al Saud, Sulaimaniyah, Riyadh, Saudi Arabia, on 14 August 2018 by Homeland Security agents.

Sri Lanka

11. The Working Group transmitted 56 cases to the Government, concerning:

(a) Puniyamoorthi Palanimuthu, allegedly abducted on 5 September 1990 from Vantharamoolai Eastern University Refugee Camp, Batticaloe, Eastern Province, Sri Lanka, by members of the Sri Lankan Army;

(b) Vincent Mersiyaas, allegedly disappeared on 26 November 2006 near Vavuniya Town and believed to have been abducted by the Sri Lankan Army;

(c) Vikneshvaran Suntharam, allegedly abducted on 25 December 2007 from his residence in Batticaloe District by individuals believed to be members of the Sri Lankan Army;

(d) Yogendran Siluvaimuthu, allegedly disappeared on 17 May 2009 after being brought from Mullaithevu to the Omanthai Camp by the Sri Lankan Army;

(e) Umunithambi Chinathambi, allegedly abducted on 9 September 1990 in the village of Saturukondan by members of the Sri Lankan Army;

(f) Valipillai Chinathambi, allegedly abducted on 9 September 1990 in the village of Saturukondan by members of the Sri Lankan Army;

(g) Thilaiyamma Ilaiyathambi, allegedly abducted on 9 September 1990 in the village of Saturukondan by members of the Sri Lankan Army;

(h) Vijayakumar Kanahaiya, allegedly abducted on 9 September 1990 in the village of Saturukondan by members of the Sri Lankan Army;

(i) Rameshkaran Kanapathipillai, allegedly abducted on 9 September 1990 in the village of Saturukondan by members of the Sri Lankan Army;

(j) Sureshkaran Kanapathipillai allegedly abducted on 9 September 1990 in the village of Saturukondan by members of the Sri Lankan Army;

(k) Thanapalan Kanapathipillai allegedly abducted on 9 September 1990 in the village of Saturukondan by members of the Sri Lankan Army;

(l) Thangamma Kandhapan allegedly abducted on 9 September 1990 in the village of Saturukondan by members of the Sri Lankan Army;

(m) Savundaram Kirubaratnam allegedly abducted on 9 September 1990 in the village of Saturukondan by members of the Sri Lankan Army;

(n) Seenithambi Kumarvelu, allegedly abducted on 9 September 1990 in the village of Saturukondan by members of the Sri Lankan Army;

(o) Suthakaran Rathnaiya allegedly abducted on 9 September 1990 in the village of Saturukondan by members of the Sri Lankan Army;

(p) Kanapathipillai Thambipillai allegedly abducted on 9 September 1990 in the village of Saturukondan by members of the Sri Lankan Army;

(q) Supulaxmi Thangavel, allegedly abducted on 9 September 1990 in the village of Saturukondan by members of the Sri Lankan Army;

(r) Shanthimathi Vadivel, allegedly abducted on 9 September 1990 in the village of Saturukondan by members of the Sri Lankan Army;

- (s) Karunairasa Seyanthan, allegedly last seen on the Vadduvakal Bridge, Vadduvakal, Mullaitivu District, Northern Province being taken away by the Sri Lankan Army;
- (t) Navaratnam Navendran, allegedly last seen on 10 March 2009 in Matthalan, Mullivaikyal, Mullaitivu District, Northern Province, Sri Lanka and believed to have been abducted by the Sri Lankan Army;
- (u) Sriathan Pararasasingham, allegedly last seen on 13 April 2009 in Pokkunai, Matthalan Mullivaikyal in the Mullaitivu District and believed to have been abducted by the Sri Lankan Army;
- (v) Nitharjini Rasamohan allegedly seen in April 2009 in Mullivaikyal, in the Mullaitivu District and believed to have been abducted by the Sri Lankan Army;
- (w) Rasendram Gajendran allegedly disappeared on 10 May 2009 in Mullivaikyal, Mullaitivu District, Northern Province and believed to have been abducted by the Sri Lankan Army;
- (x) Prasath Upulkumara Thupahi, allegedly abducted on 4 September 1989 from river in Rathgama, Poogoda, Olunagoda, Rathgama, Galle, Southern Province, by members of the Sri Lankan Army;
- (y) Muthaiah Muthukumar allegedly last seen on 5 September 1990 being taken away from Vantharamoolai Eastern University Refugee Camp, Batticaloe, Eastern Province, by the Army;
- (z) Vikneshwaran Nahaiya allegedly last seen on 5 September 1990 being taken away from Vantharamoolai Eastern University Refugee Camp, Batticaloe, Eastern Province, by the Army;
- (aa) Gunarathinam Nawaratnam allegedly abducted on 9 September 1990 in the village of Saturukondan by members of the Sri Lankan Army;
- (bb) Mohansundari Paramakutty allegedly abducted on 9 September 1990 in the village of Saturukondan by members of the Sri Lankan Army;
- (cc) Vinothini Perinbam allegedly abducted on 9 September 1990 in the village of Saturukondan by members of the Sri Lankan Army;
- (dd) Ponammah Periyathambi allegedly abducted on 9 September 1990 in the village of Saturukondan by members of the Sri Lankan Army;
- (ee) Dathees Mahendran allegedly disappeared 13 March 2009 in the village of Vellamullivaikyal, Mullaitivu District, Northern Province and believed to have been abducted by the Sri Lankan Army;
- (ff) Chandrakumar Dharmarasi allegedly disappeared on 28 August 1993 from Vantharamoolai, Batticaloe, Eastern Province and believed to have been abducted by the Sri Lankan Army;
- (gg) Balasubramainiyam Naheshwaran allegedly disappeared on 20 May 1996 from Chenkaladi, Batticaloe district, Eastern Province and believed to have been abducted by the Sri Lankan Army;
- (hh) Prakashan Srikaneshamoorthi, allegedly disappeared on 10 June 1993 in Batticaloe, Eastern Province, and believed to have been abducted by the Sri Lankan Army;
- (ii) Sivanlavan Seevarathinam allegedly disappeared on 6 October 2009 in Batticaloe District, Eastern Province, and believed to have been abducted by the Sri Lankan Army;
- (jj) Sooriyakumar Dharmarasi allegedly disappeared on 6 March 2001 and believed to have been abducted by the Sri Lankan Army;
- (kk) Niroshan Joseph, allegedly abducted on 18 January 2009 from Velam Mullivaikal, Mullaitivu district, by the Sri Lankan Army;

(ll) Thiyananth Yogendran allegedly abducted on 21 March 2009, in Pudukuduirippu, in the Mullaitivu District and Northern Province by the Sri Lankan Army;

(mm) Joyal Sivachandru allegedly abducted on 21 April 2009, in the Mullaitivu District, Northern Province of Sri Lanka by the Sri Lankan Army;

(nn) Sivarajan Sinnarasa allegedly abducted in August 2008, when leaving his residence in Paranthan, Killinochi District, Northern Province, by the Sri Lankan Army;

(oo) Shantha Saundra Hennadige allegedly abducted on 15 November 1989 from Kotagoda, Hungadeniya, Mathara District, Southern Province, Sri Lanka, by the Sri Lankan Army;

(pp) Thivanesan Santhirakumar allegedly abducted on 14 October 2008 from his residence in Kovil Puliyankulam, Velankulam, Vanuniya, Northern Province, by the Sri Lankan Army;

(qq) Priyantha Vijesinghe Ranepura Hevage allegedly abducted on 15 March 1989 from Weliketiya, Mathara District, Southern Province, Sri Lanka by the Sri Lankan Army;

(rr) Nagaratnam Subatheepan allegedly last seen on 1 March 2009 and is believed to have later been abducted by the Sri Lankan Army;

(ss) Upali Lawransuhewage allegedly abducted on 30 November 1989 from Madamwella, Dewinuwara, Mathara District, Southern Province, Sri Lanka, by the Sri Lankan Army;

(tt) Anton Kovinthisamy allegedly abducted on 6 October 2008 in Vavuniya, between Poovarasankulam and Thalikulam, Northern Province, Sri Lanka by the Sri Lankan Army;

(uu) Parameswaran Kirushnan allegedly last seen in 2009 in Iranaipalai, Puthukudiyuppu (Mullaithivu District) and believed to have later been abducted by the Army;

(vv) Piratheepan Kanagaratnam allegedly disappeared on 23 February 2009 from Pokkunai, Mullaithivu District and believed to have been abducted by the Sri Lankan Army;

(ww) Kajatheepan Kanagaratnam allegedly disappeared on 1 March 2009 from Matthalan, Mullaithivu District and is believed to have been abducted by the Sri Lankan Army;

(xx) Jeevananthini Kanakarathnam allegedly abducted on 12 May 2009, from Mullivaikkal, Mullaithivu District, Northern Province by the Sri Lankan Army;

(yy) Arutsan Muthulingam allegedly disappeared on 24 February 2009 from Ambalavan, Pokkanai, Mullaitivu District, Northern Province and is believed to have been abducted by the Sri Lankan Army;

(zz) Jeyamani Thushyanthan allegedly last seen in Mullikulam Mannar District, Northern Province and believed to have been abducted by the Sri Lankan Army;

(aaa) Jeyamani Sasiharan, allegedly last seen on 10 April 2009 and believed to have later been abducted by the Sri Lankan Army;

(bbb) Chandrasena Charlis Silva allegedly abducted on 2 November 1990 near the Beruwla Buddhist Centre, Kalutara District, Western Province, Sri Lanka by unidentified individuals believed to be members of the Army;

(ccc) Navaraththinam Aarumugam, allegedly abducted on 24 June 2009 from Manatchchenai, Poththuvil, Ampara district, Eastern Province, Sri Lanka by unidentified individuals believed to be linked to the government;

(ddd) Manogaran Aarumugam, allegedly abducted on 24 June 2009 from Manatchchenai, Poththuvil, Ampara district, Eastern Province, Sri Lanka by unidentified individuals believed to be linked to the government.

Syrian Arab Republic

12. The Working Group transmitted 8 cases to the Government, concerning:

- (a) Abdulhamid Alsaloum, allegedly arrested on 27 October 2012 by Air Force Security agents in a raid on his home;
- (b) Aiman Alnemr, allegedly arrested on 29 August 2014 when he turned himself in at the Political Security branch in Hama town;
- (c) Hussein Alnemr, allegedly arrested on 21 February 2014 by the Syrian security forces in a raid on his home;
- (d) Ahmad Dahhan, allegedly arrested on 7 March 2012 by agents affiliated with the Palestine Branch in al Salehiya area of Damascus;
- (e) Wardan Alnemr, allegedly arrested on 1 May 2013 by three agents of the Military Security Branch in a raid on Al-Dahra neighborhood;
- (f) Moussa Al Allawi, allegedly arrested on 12 July 2012 by Military Police units in Qaboun;
- (g) Imad Al Ammar, allegedly abducted on 11 March 2012 by agents of the Syrian Military Intelligence Services following a raid on his village;
- (h) Alaa Al Ammar, allegedly abducted on 27 November 2012 by the Syrian Military Intelligence at a checkpoint near the train station of Mheen town.

Annex II

[Spanish only]

General allegations

Colombia

1. El Grupo de Trabajo recibió información de fuentes fidedignas sobre obstáculos encontrados en la aplicación de la Declaración sobre la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas en Colombia. La presente alegación general se enfoca en el riesgo que el inicio de obras de dragado del estero de San Antonio puede generar en las posibilidades de hallar a personas desaparecidas, cuyos cuerpos habrían sido dispuestos en esa zona.
2. De acuerdo a la información recibida, las obras se enmarcan en un proyecto suscrito entre el Distrito de Buenaventura y el Instituto Nacional de Vías –INVIAS-, y consisten en ampliar la profundidad en el estero para que la zona de marea baja sea navegable para los barcos de cabotaje. Aunque la obra mejora las condiciones de movilidad para las comunidades, de acuerdo a la alegación también puede ocasionar daño en los lugares de disposición de los cuerpos que fueron arrojados u ocultos en la zona del estero, en lugares conocidos por la comunidad como acuafosas y, en consecuencia, destruir los cuerpos allí ocultos.
3. Según información suministrada por las fuentes, desde el año 2000 se ha documentado la práctica de ocultamiento en las acuafosas de los cuerpos de personas desaparecidas forzosamente por acción de organizaciones armadas ilegales. Es así que se advierte que habría indicios fuertes para afirmar que en el Estero de San Antonio yacen cuerpos de personas desaparecidas a las que sus familias están buscando.
4. De acuerdo a la información recibida, es conocida la existencia de lugares de disposición de cuerpos en el estero San Antonio y, debido a sus dimensiones de recorrido es una zona compleja y extensa para la búsqueda de personas dadas por desaparecidas. La zona, de seis kilómetros, va desde el barrio Muro Yusti, Puente Nayero, la Playita, Alfonso López, Alberto Lleras Camargo, Palo seco, Cocal, Kennedy, San Luis, San Francisco, Juan XXIII, Pampa linda, Olímpico, el Cristal, Colón hasta Antonio Nariño.
5. Según las fuentes, en caso de adelantarse las operaciones del proyecto sin realizar previamente la búsqueda de los cuerpos arrojados al estero, se teme la inminente pérdida de los cuerpos y la evidencia, con lo cual se destruye cualquier posibilidad de hallazgo y cese de la incertidumbre. Las operaciones de dragado, se sostiene, ocasionan por sí mismas un deterioro en los cuerpos que puede conducir a la pérdida de estructuras óseas que contienen material genético que permitiría su identificación así como otras evidencias del hecho que pueda encontrarse en el lugar.
6. De acuerdo a la información recibida por el Grupo de Trabajo, las condiciones del suelo y el clima del estero San Antonio, al igual que los fenómenos ocasionados por los flujos de las mareas podría haber hecho que las evidencias se hayan perdido o deteriorado, así que cualquier acción externa, como la del dragado, sería perjudicial para obtener respuesta y garantizar los derechos a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición para los familiares de los desaparecidos.
7. Las fuentes sostienen que no se han llevado adelante evaluaciones del riesgo que genera el dragado en las búsquedas ni se han adoptado medidas urgentes para mitigarlo y, de esta manera, proteger los derechos de las personas desaparecidas y sus familias. Asimismo reclaman el establecimiento de un plan de acción que garantice el derecho de los familiares de los desaparecidos a la búsqueda de sus seres queridos en el estero de San Antonio.

Annex III

[French and English only]

Replies to general allegations

China

1. On 12 June 2020, the Government replied to the general allegation transmitted after the 119th session (A/HRC/WGEID/119/1, annex I).

Legislation and practice regarding the *liuzhi* (supervision) system

Legislation regarding the *liuzhi* supervision system

2. First, there are conditions for the use of *liuzhi* supervision. According to article 22 of the Supervision Law of the People's Republic of China, the conditions specify that if a person under investigation is suspected of corruption, bribery, dereliction of duty, malfeasance in office, or any other serious duty-related violation or crime, and a supervision body has obtained some facts and evidence on the violation or crime but needs to conduct further investigation of important issues, the person may be detained at a specific place in any of the following circumstances: 1. if the case in question is particularly important or complex; 2. if there is a risk of flight or suicide; 3. if there is a risk of collusion of suspects' confessions or of falsifications, cover-ups or destruction of evidence; or 4. if there is the possibility of other acts that may obstruct the investigation. In addition, the supervision body may apply *liuzhi* supervision in accordance with the above provisions in the case of persons suspected of crimes involving bribery or actions taken in collusion in the performance of work duties.

3. Secondly, there is the examination and approval procedure, and also the department responsible for the *liuzhi* supervision measure. Under the first paragraph of article 43 of the Supervision Law, when supervision bodies adopt measures of *liuzhi* supervision, the measures must be the subject of joint consideration and a decision taken collectively by the body's directors. *Liuzhi* supervision measures adopted by supervision bodies below the level of multiple-district cities must be reported for approval to the supervision body at the next higher level. The provincial supervision body reports the measures for the record to the National Supervisory Commission.

4. Thirdly, there are procedural requirements for taking *liuzhi* supervision measures. Article 41 of the Supervision Law specifies that investigators who take such investigative measures must, in accordance with the regulations, produce certificates adopted by at least two persons, issued in writing and sealed and signed by the relevant persons.

5. Fourthly, there is a legal obligation of notification. Article 44 (1) of the Supervision Law stipulates that the employers and family members of persons under investigation for whom *liuzhi* supervision measures have been adopted must be notified within 24 hours, unless there is the possibility of the destruction or falsification of evidence, witness tampering, collusion of suspects' confessions or other circumstances involving obstruction of the investigation. Once circumstances of obstruction of an investigation no longer exist, the person's employer and family must be notified immediately.

6. Fifth, there is a limit on the length of *liuzhi* supervision. Article 43 (2) of the Supervision Law specifies that the period of *liuzhi* supervision must not exceed three months. In exceptional circumstances, it may be extended once, and the extension must not exceed three months. If the measure is taken by a supervision body below the provincial level, then the extension must be reported for approval to the next higher level. If a supervision body finds that a supervision measure has been taken improperly, it must promptly rescind it.

7. Sixth, there are the guarantees of the rights of persons placed under *liuzhi* supervision. Articles 40, 41 and 44 of the Supervision Law stipulate that the supervision body must

provide guarantees for the diet, rest and safety of persons placed under *liuzhi* supervision and provide them with medical services. When they are interrogated, interrogation must take place at reasonable time and for a reasonable duration and the record of the interrogation must be read and signed by the person who is interrogated. It is strictly prohibited to use threats, lures, cheating or other illegal means to collect evidence or to insult, beat, scold or abuse persons under investigation or others involved in a case, or to use corporal punishment, or hidden forms of corporal punishment, against them. Investigators, when questioning, searching, sealing or impounding evidence and otherwise conducting important work to collect evidence, must make audio and video recordings of the entire process and keep them for reference. These provisions all help to protect the legal rights of persons subjected to *liuzhi* supervision.

8. Seventh, in the event of illegal *liuzhi* supervision, there are ways to remedy the situation and establish responsibilities. Articles 60, 65 and 67 of the Supervision Law establish that if the legal period of *liuzhi* supervision is exceeded and the supervision body and its staff members fail to remove the *liuzhi* supervision measure, the persons under investigation and their close relatives have the right to appeal to the supervision body or even to apply for review by a supervision body at a higher level, and if the supervision body and its staff members take *liuzhi* supervision measures in violation of the regulations, the leaders who bear responsibility and the staff members who are directly responsible must be dealt with according to the law. At the same time, if the supervision body, its staff and the staff members directly responsible, in the course of their duties, violate the rights and interests of citizens, legal entities or other organizations or cause damages, the latter are entitled to compensation from the State, in accordance with the law.

9. Eighth, there is an organic connection between the supervision system and the criminal procedure system. Article 170 of the Criminal Procedure Law of the People's Republic of China makes provision for a conversion between *liuzhi* supervision measures and criminal coercive measures. For cases that have been transferred for prosecution by a supervision body when *liuzhi* supervision measures have already been taken, the people's procuratorate must first detain the criminal suspect, at which time the *liuzhi* supervision measures are automatically lifted. The people's procuratorate then must make a decision within 10 days whether to proceed with the person's arrest, place the person on bail or assign the person to residential surveillance. Article 44 (3) of the Supervision Law establishes that the period under *liuzhi* supervision is to be deducted from the sentence. Once persons subjected to *liuzhi* supervision are transferred as suspects to a judicial body, if they are sentenced, in accordance with the law, to public surveillance, criminal detention or fixed-term imprisonment, one day of supervision is considered equivalent to two days of public surveillance, or to one day of criminal detention or fixed-term imprisonment.

10. After the adoption of the Supervision Law, the National Supervisory Commission issued a series of regulations to strengthen the supervision and administration of the use of *liuzhi* supervision.

The *liuzhi* supervision system in practice

11. Since the reform of the national supervision system, the supervision bodies at all levels have made use, in accordance with the law, of *liuzhi* supervision measures, with strict compliance with the Supervision Law and the relevant supporting regulations. First, they have fully understood the conditions for the implementation of such measures and have strictly abided by the legal limits on the length of *liuzhi* supervision. Secondly, they have acted strictly in accordance with the examination and approval mandates in implementing, extending and ending supervision measures and they have reported such measures to the higher authorities for the purposes of approval or record-keeping, and they have rigorously carried out the approval and filing procedures when required. Third, they have strictly implemented the relevant procedures, for example informing persons subjected to the *liuzhi* supervision measures of their rights and obligations, keeping their employers and family members informed and issuing the relevant legal documents, in accordance with the law, to protect their right to be informed. Fourth, in implementing the *liuzhi* supervision measures, they have guaranteed the legal rights of the persons subjected to supervision, with the relevant

departments within the supervision bodies monitoring the entire process. Fifth, the interrogation of persons subjected to *liuzhi* supervision measures has taken place with strict application of the relevant rules, with video and audio recordings of the entire interrogation process.

12. Zhejiang Province, as a pilot area for the reform of the national supervision system, attaches great importance to adopting, in accordance with the law and legal standards, various investigation measures, including *liuzhi* supervision. The Zhejiang Province Supervisory Commission drew up and adopted the Rules for the Operation of Supervision in Zhejiang Province (for trial implementation), the Code of Conduct for the Staff of Discipline Inspection and Supervision Bodies in Zhejiang Province and the Operational Guidelines for Supervision Measures in Zhejiang Province (for trial implementation), providing guidance for the supervision bodies in the whole province to adopt investigation measures, in accordance with the law, including *liuzhi* supervision measures. In practice, the supervision bodies of the entire province strictly follow the relevant provisions of the *liuzhi* supervision measures in this system and explore the possibility of establishing a supervision mechanism in which the supervision bodies issue decisions on *liuzhi* supervision stays while the public security bodies are responsible for management and security, thus ensuring that they have clearly defined responsibilities and the departments responsible for case supervision and management oversee the whole supervision process. At the same time, a special department has been set up to receive complaints and accusations of excessive periods of *liuzhi* supervision or infringement of the legal rights of persons subjected to supervision, so as to fully protect their legal rights.

13. During the pilot period, from January 2017 to the end of March 2018, the supervision bodies of the whole province took *liuzhi* supervision measures for 343 persons under investigation, with an average length of stay of 44.67 days, the longest being 181 days and the shortest being 2 days. The length of the measures did not exceed the statutory time limit of 6 months, and in all cases the families of the persons subjected to the *liuzhi* supervision were informed. There was no ill-treatment of the persons in question.

14. The reform of the national supervision system in China has undergone a sound pilot phase and has been the subject of a rigorous legislative process. Supervision bodies at all levels, in strict accordance with the Supervision Law and the mandate given by the legislature, have overseen all public officials exercising public power, have investigated violations and crimes in the performance of their duties and have carried out work to build up good governance and to combat corruption, with good results. *Liuzhi* supervised stays are one of the statutory supervision measures provided by the Supervision Law and do not constitute secret detention. Their applicable conditions, examination and approval procedures, time limits and the protection of the rights of the persons subjected to such supervision are all openly and clearly stipulated by law.

Morocco

15. On 17 June 2020, The Government of Morocco provided the following response to the general allegation transmitted by the Working Group on 17 April 2020 (A/HRC/WGEID/120/1, annex I).

Observations concernant l'allégation générale du Groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires

16. Faisant suite à la Note verbale du 17 avril 2020 du Groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires (GTDFI) concernant une allégation générale relative aux disparitions forcées ou involontaires au Maroc, les autorités marocaines font part de leurs observations à cet égard et demandent leur publication en intégralité dans le rapport de la 122ème session du Groupe (du 21 au 30 septembre 2020) et qu'il y soit fait référence dans le

prochain rapport annuel du Groupe de travail qui sera présenté au Conseil des droits de l'homme lors de sa 45^{ème} session.

17. Les autorités marocaines rappellent préalablement qu'elles ont toujours veillé à entretenir un cadre d'interaction positive et constructive avec le Groupe de travail depuis de très nombreuses années, ce qui lui a d'ailleurs permis de suivre de près tous les développements liés au traitement du dossier des violations graves du passé au Maroc. Les autorités marocaines se félicitaient que la démarche du Groupe de travail s'inscrivait initialement dans une démarche d'accompagnement des autorités dans leurs efforts dans le cadre du processus de justice transitionnelle engagé courageusement et avec clairvoyance au Maroc et porté au plus haut niveau de l'Etat.

18. Durant plusieurs années, les autorités ont eu la certitude que le Groupe de travail mesurait l'ampleur de ce processus et se réjouissait du cadre d'interaction basé sur la bonne foi et une véritable volonté de compréhension des spécificités de l'expérience marocaine comme l'ont démontré différentes rencontres entre le Groupe de travail et des délégations officielles de haut niveau. Dans ce contexte, les autorités avaient invité le Groupe de travail à effectuer une visite au Royaume en 2009 et pour rappel, elles avaient accueilli favorablement ses recommandations formulées à l'issue de cette visite considérant que ces recommandations soutenaient le travail des autorités et des autres parties prenantes. Une interaction qui s'est poursuivie dans le cadre du rapport de suivi de la visite en 2013.

19. Dans cet esprit de coopération, des délégations officielles de haut-niveau ont rencontré le Groupe en marge des 114^{ème}, 115^{ème}, 116^{ème} et 119^{ème} sessions. L'engagement stratégique et irréversible du Royaume en matière de droits de l'homme a été réitéré à chaque fois.

20. Des discussions franches et constructives se sont également tenues en marge de ces rencontres qui ont porté sur les cas toujours en instance devant le Groupe. A ce propos, les autorités marocaines rappellent qu'aucune expérience dans le monde ne s'est révélée parfaite au regard des grands principes sous-jacents à la justice transitionnelle et que les différentes expériences connues à travers le monde, ont toutes fait face à des difficultés objectives et ne dépendant pas de la volonté de l'Etat.

21. Dans ce contexte, les autorités marocaines s'interrogent sur le bienfondé de cette allégation générale. En effet, l'allégation générale fait délibérément abstraction des mérites du processus de justice transitionnelle marocain. Celle-ci contredit l'appréciation du Groupe de travail lui-même auparavant qui avait, à maintes reprises, expressément salué l'expérience marocaine et considéré qu'elle « devait servir de modèle à d'autres Etats ... » (Para 87 du Rapport de Mission du GTDFI au Maroc en 2009). L'expérience marocaine de justice transitionnelle avait également été appréciée par plusieurs autres mécanismes onusiens ou experts internationaux reconnus dans le monde entier sur les questions de justice transitionnelle.

22. En outre, au niveau national, il convient de souligner que le processus a été accueilli favorablement par l'ensemble des parties prenantes. En effet, l'une des spécificités réside dans le consensus social et politique national qui a pris forme entre les différentes parties prenantes, y compris et surtout les organisations non gouvernementales, les organisations syndicales, les partis politiques de tous bords qui a permis de garantir la réussite du processus initié dans un contexte d'ouverture politique et de transition démocratique.

23. Aussi, il convient également de souligner que l'ensemble du processus a été porté par des représentants des victimes et des défenseurs des droits de l'homme, lesquels étaient parties prenantes à part entière au processus et n'ont jamais cessé d'être impliqués directement. La plupart des membres de l'Instance Equité et Réconciliation (IER) étaient d'anciennes victimes des violations graves des droits de l'homme. Ce processus appuyé par Sa Majesté le Roi et l'ensemble des forces sociales et politiques, a été conçu et mené de manière souveraine, volontaire et indépendante.

24. Il convient de relever que l'expérience marocaine s'est inspirée d'autres expériences établissant des Commissions de vérité constituées sur les principes et standards internationaux en matière de justice transitionnelle, sachant que l'expérience marocaine a

intégré des dimensions inédites. L'expérience marocaine en matière de justice transitionnelle, est la première dans son genre dans la région. C'est aussi la première à être menée à la faveur d'une transition pacifique.

Le droit à la vérité dans le processus de justice transitionnelle

25. De par sa nature, ses missions et ses attributions, l'IER relève incontestablement des commissions communément appelées commissions de vérité et créées dans un contexte de justice transitionnelle. Elle a été mandatée pour élucider les cas de violations graves des droits de l'homme commises au Maroc durant la période allant de 1956 à 1999.

26. Aussi, les autorités marocaines par les présentes observations rejettent catégoriquement toute tentative visant à discréditer son processus de justice transitionnelle ou visant à dénaturer les faits, les acquis et les résultats tangibles obtenus dans le cadre de la recherche de la Vérité et dans le cadre de la réparation et des compensations.

27. En particulier, les autorités marocaines déplorent le fait que le Groupe de travail relaie dans ses termes la revendication de la source à créer un « mécanisme national chargé du parachèvement de la vérité ». Les autorités expriment leur étonnement au regard du fait que le Groupe de travail ait cru devoir préciser que ces « revendications sont appuyées par (ses) recommandations » alors que ni son rapport de mission de 2009, ni dans son rapport de suivi de 2013 relatif à l'évaluation de la mise en oeuvre de ses recommandations ne font mention à cette revendication.

28. Aussi, au-delà de cette appréciation générale, les allégations rapportées dans l'allégation générale adressée aux autorités sont contestables à différents égards. L'Allégation générale nie la réussite de l'expérience marocaine de justice transitionnelle et a fortiori l'ère nouvelle qu'elle a générée et les implications concrètes en matière de protection des droits de l'homme qu'elle a suscitées, notamment au regard des différents processus de réformes législatives et institutionnelles du début des années deux mille, puis dans le cadre de la Constitution du 1er juillet 2011.

29. L'IER a disposé de 23 mois pour examiner une période de 43 ans s'étalant du début de l'indépendance jusqu'à la création de la Commission Indépendante d'Arbitrage. Son mandat a couvert l'ensemble des violations graves, massives et/ou systématiques des droits humains : les disparitions forcées, la détention arbitraire, l'atteinte au droit à la vie, la torture, l'exil forcé, et l'usage disproportionné et excessif de la force publique lors de mouvements sociaux de protestation.

30. Parmi les particularités de l'expérience marocaine, l'Instance elle-même a élaboré ses statuts, approuvés par Dahir du 10 avril 2004, qui ont précisé et détaillé les missions dont elle est investie, les violations objet de son mandat et les modalités d'organisation de son travail. Elle a eu également le pouvoir d'accorder directement des réparations aux victimes et leurs ayants droit.

31. L'approche genre a été retenue par l'IER comme une option méthodologique transversale à tous ses domaines d'intervention. Cela a impliqué l'examen minutieux des violations subies par les femmes dans leur spécificité, des préjudices qui en ont découlé, de leur expérience particulière et de leur rôle dans la lutte contre les violations. Il s'agissait en outre de qualifier ces violations, de déterminer leurs séquelles et des mesures susceptibles de garantir la non-répétition.

32. Dans ce cadre, le Maroc a oeuvré pour la reconnaissance des violations graves et systématique du passé, l'élucidation du sort des victimes, la réparation des préjudices subis, puis la réhabilitation médicale et psychologique, la réinsertion sociale tout en prenant de véritables mesures de protection et de non-répétition.

33. Les autorités marocaines tiennent par ailleurs à rappeler que le dispositif institutionnel de justice transitionnelle mis en place a été conçu comme un mécanisme extrajudiciaire pour déterminer la responsabilité de l'État et de ses organes, et non les responsabilités individuelles, et ce, dans une logique de consolidation des réformes et de réconciliation.

34. Ce processus n'a pour autant nullement exclu le droit des victimes, de leurs familles ou ayants de leur droit de recourir à la justice. Il convient de relever d'ailleurs qu'il n'a pas été question d'adopter des lois d'amnistie de nature à favoriser l'impunité des agents publics impliqués à cette époque, ni chercher à instituer de prescription des violations.

35. Le choix d'écarter les responsabilités individuelles s'est basé non pas sur une volonté de soustraire les responsables des violations à leur responsabilité pénale, mais s'est basé sur une approche réaliste découlant d'ailleurs d'une approche comparée avec d'autres expériences de justice transitionnelle dans le monde qui ont montré leur limites sur ce sujet notamment au regard des preuves (soit de l'absence de preuve ou leur destruction).

36. L'établissement de la vérité est l'une des attributions essentielles de l'IER qui en constitue à la fois la base et l'objectif. Le droit à la vérité a en effet structuré le processus intégral de l'IER et du Comité de suivi, constituant une des dimensions ajoutées à la Commission Indépendante d'Arbitrage.

37. L'IER s'est employée à fournir les informations sur les causes des événements qui ont conduit aux violations graves de droits de l'homme, les raisons, les circonstances et les conditions de ces violations, les responsabilités de l'Etat et de ses organes et, en cas de décès ou de disparition forcées, le sort des victimes. Aussi bien dans ses dimensions individuelles que collectives, le droit à la vérité n'a fait l'objet d'aucune restriction dans le travail de l'IER ni celui du Comité de suivi (installé par le CNDH pour suivre la mise en oeuvre des recommandations de l'IER).

38. L'IER a tout mis en oeuvre pour garantir pleinement et effectivement le droit à la vérité, à la fois dans sa dimension individuelle et collective. En révélant le sort des victimes de la disparition forcée et en identifiant les raisons des violations graves des droits de l'homme. L'IER s'était appliquée à mettre en oeuvre le droit à la vérité.

39. Les autorités marocaines soulignent également que le droit à la vérité dans le processus marocain de justice transitionnelle s'est notamment distingué par :

- l'indépendance totale des deux Instances mises en place dans ce cadre ;
- le fait que l'établissement des faits par ces mécanismes s'est basé sur la collecte des preuves provenant de différentes sources : les témoignages des victimes, les informations des ONG, les auditions et les informations émanant des autorités publiques, les visites effectuées dans les lieux de détention secrets, l'exhumation de restes humains, des analyses médico-légales ;
- la combinaison d'audition à huit clos et auditions publiques des victimes et des familles ;
- Le fait que le partage de ces données avec les familles et les ayants droit et la diffusion de l'ensemble de ces données a été largement permis en posant ainsi les bases pour la préservation de la mémoire et de la réhabilitation ;
- La place et le rôle des victimes elles-mêmes et/ou des familles dans les différentes étapes du processus de justice transitionnelle.

40. L'IER a rassemblé plus de 20000 témoignages personnels de victimes et de leurs familles. Ces témoignages constituent des archives précieuses et des ressources inestimables pour l'établissement de la vérité et la préservation de la mémoire.

41. L'IER a organisé un nombre important de conférences, de séminaires et d'auditions sur une multitude de questions essentielles pour comprendre le contexte des violations des droits de l'Homme au Maroc. Elle a tenu des audiences publiques afin de donner aux victimes une tribune pour partager leurs récits.

42. Concernant spécifiquement la disparition forcée, à l'issue du processus d'investigation conduit par l'IER, 742 cas ont été élucidés et clarifiés, à travers tous les moyens disponibles et reconnus, notamment les études contextuelles, les témoignages, les enquêtes et investigations, les registres institutionnels, les archives privées et publiques, les auditions et les analyses médico-légales. Ce nombre de cas dépasse largement les listes établies par les ONG et d'autres acteurs concernés.

43. Dans ce contexte les exhumations et les analyses médico-légales ont été réalisées dans le respect des garanties juridiques et judiciaires. Les jugements déclaratifs de décès ont été rendus par les tribunaux.

44. L'ensemble de ces données a été rendu public dans le cadre de la publication du rapport final de l'IER.

45. Le Comité de suivi, avec les mêmes moyens de procédure que l'IER, continue sa mission de parachèvement de la vérité concernant le sort des cas de disparition forcée restant non élucidés. Des éléments supplémentaires relatifs à l'ensemble des travaux du Comité de suivi, feront l'objet de communications ultérieures par le Conseil national des droits de l'homme.

Réparation des dommages individuels et collectifs

46. Dans le cadre de son mandat, l'IER a ouvert des dossiers individuels qui ont tous été instruits. Les cas relevant de la compétence matérielle et temporelle de l'Instance ont fait l'objet de décisions arbitrales d'indemnisation et de recommandations relatives à d'autres modalités de réparation, à savoir la réhabilitation médicale et psychologique, la réinsertion sociale et le règlement de la situation administrative et financière des victimes.

47. Aussi, dans le cadre de l'indemnisation financière, l'IER a établi des critères et des unités de compte, sur la base du type de violation subie, du principe d'égalité et de solidarité entre les victimes ayant souffert des mêmes violations, et de l'approche genre.

48. En ce qui concerne la réparation individuelle, le nombre total de victimes des violations graves des droits de l'Homme et des ayants droit, bénéficiaires de l'indemnisation financière, depuis la création de l'Instance d'arbitrage indépendante (IAI) en 1999 et de l'Instance Équité et Réconciliation (IER), s'élève à ce jour à 27763 personnes, ayant bénéficié d'un montant de 1.929.778.728,80 de dirhams (soit 196.877.000 USD).

49. De plus, l'IER a recommandé que les victimes et les ayants droit bénéficient d'un système de couverture médicale. Le nombre global de cartes remis aux bénéficiaires, est de l'ordre de 8744 victimes et ayants droit.

50. Concernant la réinsertion sociale, l'IER a recommandé la réinsertion sociale pour certaines victimes et ayants droit ayant été incarcérés pendant de longues durées, et pour les enfants qui ont perdu leurs parents alors qu'ils étaient mineurs. A ce titre 1475 victimes et ayants droit ont bénéficié de la réinsertion sociale selon des différentes formes telles que l'intégration à la fonction publique, logement sociale, appui financier pour activité économique.

51. Concernant la régularisation de la situation administrative et financière, l'IER avait également recommandé la régularisation de la situation administrative et financière de certaines victimes licenciées de la fonction publique, en raison de leurs engagements politiques ou syndicaux. La situation administrative et financière de 393 victimes, a été réglée par les administrations concernées.

52. La réparation communautaire s'est basée sur l'approche droits humains et participative en consolidant l'implication effective des concernés et à tous les niveaux sur le genre en garantissant les intérêts des femmes et des groupes vulnérables, et le volet culturel en prenant en considération les spécificités culturelles régionales. Les projets de réparation communautaire ont été mis en œuvre dans les régions où existaient des centres de détention irréguliers, ou ayant connu des événements sociaux suivis d'une marginalisation socio-économique. Le budget alloué aux programmes mis en place s'élève à ce jour à 159.799.892.00 DHS (soit 1.630.290.000 USD). Ces données ont été rendues publiques.

53. Le programme de réparation individuelle a été exécuté. Quant au programme de réparation communautaire, il est à ce jour très largement mis en œuvre. Le Groupe de travail avait lui-même reconnu l'approche novatrice de l'IER en ce qui concerne la réparation communautaire dans son rapport de mission de 2009.

54. 39. Le Comité de suivi continue d'entretenir des relations étroites avec les victimes, les ayants droits pour les actions d'appui aussi bien à titre personnel que dans le cadre d'appui en raison de santé.

Mémoire, Histoire et Archives

55. La préservation de la mémoire, et son corollaire de garantie de non répétition, figurent clairement dans le mandat de l'IER. En effet, le Dahir établissant le mandat stipule que l'IER doit « recommander des mesures destinées à préserver la mémoire et garantir la non répétition des violations, remédier aux effets des violations et restaurer la confiance dans la primauté de la loi, et le respect des droits de l'homme » (article 9.6).

56. Tous les documents de référence encadrant le travail de l'IER (Recommandation du CCDH de 2003, Discours Royal d'installation, statuts publiés par Dahir) lui ont assigné, entre autres missions, celle de préserver la mémoire, cette préservation étant considérée comme une des composantes de la réparation mais aussi comme une des garanties de prévention de la répétition.

57. Au-delà du devoir de mémoire, l'IER a également contribué de manière importante à l'écriture de l'histoire du temps présent du Maroc, tout en s'interdisant de produire un récit unilatéral ni livrer une lecture définitive de l'histoire du Maroc récent.

58. L'IER a émis des recommandations portant sur la mémoire et l'histoire. Elle a notamment préconisé l'adoption d'une loi moderne sur les archives et la création d'un institut de recherches sur l'histoire du Maroc.

59. En partenariat avec des organismes publics et la société civile, le Comité de suivi (CNDH) poursuit le processus de préservation de la mémoire à travers la rénovation, la réhabilitation de certains anciens lieux de détention (notamment sous forme de musées), l'aménagement des cimetières à travers l'établissement de stèles commémoratives.

60. Dans le cadre de la préservation des archives, ont été remis à l'Institution nationale « Archives du Maroc » les archives de l'IER et de l'Instance Indépendante d'Arbitrage, comme il a été apporté l'appui nécessaire à cette même Institution notamment en vue de la promotion de l'archivage public relatif aux violations des droits de l'homme dans le passé.

61. Par ailleurs, toujours dans le contexte de la préservation de la mémoire, il y a lieu de souligner que 33 ouvrages relatifs aux dites violations du passé ont été publiés autour de différents thèmes, et de même ont été produits plusieurs films sur l'histoire contemporaine du Maroc. De surcroît, le CNDH a créé en son sein une unité chargée des études et recherches sur le thème « Histoire et Mémoire » au Maroc.

Réformes et garanties de non répétition

62. L'IER prévoyait dans son statut de proposer des recommandations en matière de réformes et de garanties de non répétition des violations graves des droits de l'homme. A ce titre dans son rapport final, elle a formulé des recommandations pertinentes au regard de la réforme de la Constitution, du renforcement du cadre juridique et institutionnel, de la ratification des principaux instruments internationaux pertinents, de la situation des personnes vulnérables tel que les femmes et les personnes privées de liberté, de l'incrimination des violations graves des droits de l'homme, de la gouvernance sécuritaire, de la planification stratégique en matière des droits de l'homme...

63. Ces recommandations ont eu un impact positif sur la réforme constitutionnelle en 2011 à travers la constitutionnalisation même de celles-ci. La Constitution a retenu toutes les recommandations pertinentes de l'IER à travers la primauté des Conventions internationales en matière des droits de l'homme sur le droit interne et l'harmonisation des dispositions pertinentes de la législation nationale, la criminalisation des violations graves des droits de l'homme, la consécration des droits et libertés fondamentales, la séparation des pouvoirs, le renforcement des garanties du procès équitable et la constitutionnalisation des Institutions nationales des droits de l'homme (INDH).

64. Ces recommandations ont eu par ailleurs, un impact positif sur les réformes juridiques et institutionnelles et notamment :

- La réforme de la justice ;
- Le renforcement de l'indépendance et du rôle des INDH ;
- L'intégration de la dimension droits de l'homme dans les politiques publiques ;
- L'élaboration du Plan d'Action National en matière de Démocratie et des droits de l'homme ;
- L'élaboration de la Plateforme citoyenne de la Promotion de la Culture des droits de l'homme.

65. Les autorités marocaines réitèrent leur ferme engagement dans leur interaction positive et constructive avec l'ensemble des mécanismes onusiens des droits de l'homme, et leur action continue en faveur de la protection et la promotion des droits de l'homme au niveau national et international.

Annex IV

Key guidelines on coronavirus disease (COVID-19) and enforced disappearances

1. The Working Group on Enforced or Involuntary Disappearances and the Committee on Enforced Disappearances recall that enforced disappearance is prohibited in all circumstances, and call on member States to continue, during the COVID-19 pandemic, to respect their international obligations.
2. In the context of COVID-19, it is of concern that related measures have reduced the capacity of all actors to take the necessary action to search for disappeared persons and to investigate their alleged enforced disappearance. The measures adopted to fight against the pandemic such as confinement, or the redeployment of security forces to control their implementation, obviously affect the capacity for action and reaction by the relatives of disappeared persons and the organizations that accompany them, but also of the State authorities in charge of search and investigation. In that context, it is of utmost importance that all actors involved follow best practices in relation to the search for disappeared person and the investigation of enforced disappearances.
3. The current circumstances are particularly concerning in relation to recent disappearances in which the immediate intervention of State authorities is required to search for the disappeared person. These circumstances also amount to an additional factor of victimization for the relatives of persons who have been disappeared for years, as authorities de facto suspend all measures to search for them and investigate their disappearance. Particular attention is also necessary to ensure that COVID-19 does not become an excuse for committing enforced disappearances.
4. The Working Group on Enforced or Involuntary Disappearances and the Committee on Enforced Disappearances wish to call the attention of States to eight key guidelines to be taken into account by States in the COVID-19 context.

Guideline 1. Enforced disappearances remain strictly prohibited in all circumstances

5. Enforced disappearances are continuing to occur and there is an additional risk of States using the pandemic and associated states of emergency as cover for enforced disappearances.
6. The International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance ([the Convention](#), article 1) and the Declaration on the Protection of All Persons from Enforced Disappearance ([the Declaration](#), articles 2 and 7) are clear to the effect that enforced disappearance is strictly prohibited in all circumstances. States thus should not practise, permit or tolerate enforced disappearances at any time, including during the pandemic.

Guideline 2. Search and investigation into enforced disappearances cannot be discontinued and must be carried out without delay

7. The COVID-19 context poses additional challenges to the abilities of State authorities to take action immediately and to visit relevant sites. In particular specific health protection measures need to be taken for State agents as well as for victims and civil society

organizations who should be able to take part to the search and investigation.¹ However, the COVID-19 context cannot justify the authorities' failure to take immediate action to search for disappeared persons: every day that passes puts the victim at further risk of mistreatment and death.

8. In compliance with articles 12 and 24 of the Convention and article 13 of the Declaration, the search for disappeared persons and the investigation of cases of enforced disappearances are continuing obligations that cannot be suspended, even in the context of the pandemic. In all activities developed, States are urged to follow the **Guiding principles for the search for disappeared persons** produced by the Committee.

9. As soon as the competent authorities become aware, through any means, or have any indications that a person has been subjected to enforced disappearance, they should begin the search immediately and promptly, even when no formal complaint or request has been made (article 9(1) of the Declaration, article 12(1) and 2 of the Convention).² Whenever necessary, adapted health precautions must be taken for all actors involved to enable them to carry out all required search and investigation activities, such as visits to the relevant sites (article 9(2) of the Declaration, art. 12(3)b of the Convention).³

10. Throughout the process of search and investigation, channels to report cases and to follow-up on any developments should remain accessible to relatives and the organizations supporting them. They should be kept periodically informed of the activities being undertaken in their respective cases.

Guideline 3.

Information on individuals deprived of their liberty including those subjected to compulsory quarantine should be provided to their families and monitoring should continue

11. The COVID-19 pandemic has created new contexts where enforced disappearances may occur. This includes during compulsory quarantine in places of deprivation of liberty such as quarantine centres or medical facilities where individuals may, intentionally or unintentionally, be deprived of contact with their relatives.

12. At the same time, the suspension of visits to regular places of detention has, in some cases, led to a complete absence of contact between detainees and the outside world. This is conducive to incommunicado detention and may lead to enforced disappearances.

13. Procedural guarantees contained in articles 12, 17 to 21 of the Convention and 9 to 13 of the Declaration apply at all times and to all places in which persons are deprived of their liberty, including compulsory quarantine centres. Whatever the circumstances, all individuals deprived of their liberty must be held only in officially recognized and supervised places of deprivation of liberty, and any form of secret detention must be excluded. State should also proactively ensure that the authorities in charge of the search for the disappeared person have access to all places of detention. States must also take all necessary measures to ensure that persons deprived of liberty are able to communicate with their relatives, counsel or any other person of their choice, and with consular authorities,⁴ including when visits have to be limited.

¹ Committee on Enforced Disappearances, Guiding principles for the search for disappeared persons (CED/C/7), "Principle 14. The search should be carried out safely".

² CED, Concluding observations on Colombia, CED/C/COL/CO/1 (2016), paras. 20 (a) and 26 (a); Iraq, CED/C/IRQ/CO/1 (2015), para. 20; Mexico CED/C/MEX/CO/1Vi (2015), paras. 28 (a) and 41 (a); Bolivia CED/C/BOL/CO/1 (2019), para. 21.

³ CED, Guiding Principles for the Search for Disappeared Persons, CED/C/7, Principle 6: "The Search should begin without Delay", and Principle 10: "The Search should be organized efficiently", paras. 2 and 3.

⁴ CED, Concluding observations on Colombia CED/C/COL/CO/1 (2016), paras. 29–31, Iraq CED/C/IRQ/CO/1 (2015), paras. 28–29; Tunisia CED/C/TUN/CO/1 (2016), para.30.

14. Releases from places of deprivation of liberty should be done in a manner permitting verification of the release and States should take necessary measures to assure the physical integrity and ability of individuals to exercise fully their rights at the time of release. Monitoring of places of detention, which is an important tool to prevent enforced disappearances, should also continue with health precautions taken as appropriate.

Guideline 4.

Bodies of the deceased should be dealt with in a manner permitting identification by relatives and remains should be treated in line with their tradition, religion and culture

15. In some contexts, the treatment of the bodies of individuals deceased through COVID-19 has led to a risk of disappearances. This includes the lack of proper registration of remains, and the loss of bodies before relatives can identify them. In countries where enforced disappearances are prevalent, specific situations have been brought to the attention of the Committee and Working Group demonstrating a risk that such practices are being used to conceal cases.

16. States have the obligation to ensure that the recovery, identification, reporting and return of the remains of deceased persons to their families is carried out in a scientifically rigorous, dignified and respectful manner, in conformity with the highest standards (articles 15, 17(3) and 24(3) of the Convention, article 19 of the Declaration).⁵ Dead bodies must be consistently registered and stored in a way permitting identification and the performance of autopsies. The relatives of persons who have died as a result of COVID-19 or other causes, must systematically be given the opportunity to identify the remains, and all remains must be dealt with in line with their tradition, religion or culture, despite the various challenges that may be raised by the COVID-19 context (such as, for example, the lack of access to bodies for health reasons; the lack of capacity of the competent authorities to reply to requests for the return of remains; the unavailability of forensic experts as a consequence of the COVID-19 confinement measures, etc.).

Guideline 5.

Access to information should be assured

17. For many victims of enforced disappearances, access to information on the progress of the search or investigation is only possible through physical visits to the premises of the competent authorities. Such visits may be significantly limited in the current circumstances. Even when contact is possible through other means such as telephone or the internet, victims have indicated that, in many instances, no replies are being received.

18. Any person with a legitimate interest should have access to the information related to an individual's deprivation of liberty (articles 18 and 19 of the Convention and 10 of the Declaration).⁶ Where access to that information is denied, any persons with a legitimate interest, is entitled to take proceedings before a court as a means of obtaining without delay this information. This right may not be suspended or restricted in any circumstances (article 20(2) of the Convention).⁷ The COVID-19 context should not extend the delays in terms of access to such remedies, which remain particularly urgent in cases of unlawful detention and disappearance.

⁵ WGEID, General Comment on the Right to the truth, A/HRC/16/48, para. 6, CED, Follow up to Concluding observations on Mexico, CED/C/MEX/CO/1/Add.1 (2019), para.21; Concluding Observations on Ecuador CED/C/ECU/CO/1 (2017), para. 10 (b).

⁶ CED, Concluding observations on Iraq CED/C/IRQ/CO/1 (2015), para. 29; Mexico CED/C/MEX/CO/1 (2015), para. 35; Honduras, CED/C/HND/CO/1 (2018), para. 33; Slovakia CED/C/SVK/CO/1 (2019), paras. 16–17.

⁷ CED, Concluding observations on Iraq (2015), CED/C/IRQ/CO/1 para. 30; Burkina Faso CED/C/BFA/CO/1 (2016), para. 32; Japan CED/C/JPN/CO/1 (2018), para. 34; Slovakia CED/C/SVK/CO/1 (2019), para. 21.

Guideline 6.**Relatives of disappeared persons, their representatives and surviving victims of enforced disappearances should be supported and empowered, and protected from harassment or reprisals**

19. The relatives of forcibly disappeared persons, their representatives, and surviving victims of enforced disappearances may be in an additionally precarious position during this period of crisis. Enforced disappearances always put relatives in very challenging position. Their victimization becomes even greater when the head of household is disappeared. As the family structure is disrupted, spouses and children are affected economically, socially and psychologically and have specific needs. Taking into account that men are usually the main target of enforced disappearances, the Committee and the Working Group underline the particular gravity of the situation for women in that context.⁸ The COVID-19 pandemic has often led to additional difficulties for victims to find interlocutors and support for their needs.

20. In some contexts, relatives, human rights defenders and organizations working on disappearances have also continued to face harassment and intimidation.

21. States must take appropriate steps to support disappeared persons and their relatives in fields such as social welfare, financial matters, family law and property rights (article 24(6) of the Convention), even more so in the context of the economic crisis resulting from the COVID-19 pandemic. In this connection, the specific position of relatives and victims of enforced disappearance should be considered in any programmes to mitigate the impact of the pandemic. This is in addition to States obligations to ensure the right of victims to obtain reparation and prompt, fair and adequate compensation (article 24(4) of the Convention and article 19 of the Declaration).

22. States must also ensure that all those involved in the search and investigation of enforced disappearances are protected from reprisals, and that all acts of intimidation or reprisals are investigated and punished without delay (articles 12 and 24(7) of the Convention and 13 of the Declaration).

Guideline 7.**Enforced disappearance of migrants should be prevented and terminated**

23. COVID-19 has created additional risks for migrants. Those who may have decided to migrate due to a risk of enforced disappearance, face the closure of borders and the suspension of asylum procedures. Migrants also continue to risk enforced disappearance during their journey or upon arrival in their country of destination and forced returns have continued despite the pandemic, in violation of the principle of non-refoulement.

24. States remain strictly prohibited from expelling, returning or extraditing a person to another state where there are substantial grounds for believing that he or she would be in danger of being subjected to enforced disappearance (article 16 of the Convention and article 8 of the Declaration). The search and investigation into disappearances of migrants should continue without delay, with appropriate health precautions taken as required. Where migrants are deprived of their liberty, they should be registered and be able to communicate with their relatives, lawyers or representatives as well as be informed about their right to communicate with the consular authorities of their country of origin. States are urged to implement the recommendations contained in the Working Group's report on [enforced disappearances in the context of migration](#). States should also continue to cooperate with each other to assist victims of enforced disappearance to search for, locate and release disappeared persons, and to return remains in case of death (article 15 of the Convention and article 2 of the Declaration).

⁸ WGEID, General comment on women affected by enforced disappearances, A/HRC/WGEID/98/2, para. 12.

Guideline 8.**Enforced disappearance of women and of children born in detention should be prevented and terminated**

25. In the context of the pandemic, women are at a heightened risk of suffering gender-based violence, as well as being subjected to enforced disappearance, especially when deprived of their liberty for health reasons. The enforced disappearance of women is a form of gender-based violence when women are specifically targeted because of their sex or gender.⁹ In certain countries, women from minority groups and women affected by poverty and social inequalities are particularly exposed to enforced disappearances.¹⁰ These pre-existing vulnerabilities may be exacerbated by the COVID-19 pandemic. COVID-19 also heightens the risk that children born to mothers who are deprived of liberty will not be registered or recognised by the law and may be subjected to appropriation.

26. No gender-based violence, including as related to cases of enforced disappearance, can be justified. States should ensure that the pandemic does not result in a limitation to the measures taken to prevent such violations. In this context, strict compliance with international standards in relation to detained women is essential to the prevention of enforced disappearances. Holding women in detention in unofficial or secret places of detention is strictly prohibited in all circumstances.¹¹

27. States that have not already done so should establish specific protection measures for pregnant women who are detained.¹² In particular, the birth of their children should be immediately registered, guaranteeing their true identity, and information should be provided to the relatives or other persons with a legitimate interest.¹³

⁹ Ibid, para. 4.

¹⁰ Ibid para. 7.

¹¹ Ibid, paras. 3, 20.

¹² Ibid. paras. 9 and 10, WGEID, General comment on children and enforced disappearances, A/HRC/WGEID/98/1, para. 15.

¹³ Ibid.

Annex V

Press releases and statements

1. On 10 June 2020, the Working Group, together with other special procedure mechanisms, issued a press release calling on Zimbabwe to end a reported pattern of disappearances and torture aimed at suppressing protests and dissent.¹
2. On 25 June 2020, the Working Group, together with other special procedure mechanisms, issued a press release lamenting the decision by the United States Government to target and sanction individual staff of the International Criminal Court (ICC).²
3. On 25 June 2020, on the 70th anniversary of the Korean War, the Working Group, together with other special procedure mechanisms, issued a press release urging the Democratic People's Republic of Korea (DPRK) to repatriate hundreds of people abducted during and after the Korean War, and end decades of anguish for the families of those taken.³
4. On 26 June 2020, the Working Group, together with other special procedure mechanisms, issued a press release expressing alarm at the repression of fundamental freedoms in China.⁴
5. On 29 June 2020, the Working Group, together with other special procedure mechanisms, issued a press release welcoming the disclosure by the Pakistani Government of the whereabouts of Idris Khattak, a leading human rights defender, yet strongly condemning his enforced disappearance.⁵
6. On 3 July 2020, the Working Group, together with other special procedure mechanisms, issued a press release expressing outrage at reports of the secret execution by the Islamic Republic of Iran of Hedayat Abdollahpour, a member of the Kurdish minority in the country.⁶
7. On 9 July 2020, ahead of the 25th Anniversary of the Srebrenica Memorial Day on 11 July, the Working Group, together with other special procedure mechanisms, issued a statement urging governments to honour victims of the 1995 Srebrenica genocide by building peaceful, inclusive and just societies to prevent a repetition of such an atrocity.⁷
8. On 16 July 2020, the Working Group, together with other special procedure mechanisms, issued a press release strongly condemning the decision in the Islamic Republic of Iran to uphold death sentences against three men for participating in protests in November 2019.⁸
9. On 4 August 2020, a year after India revoked the special status of Jammu and Kashmir, the Working Group, together with other special procedure mechanisms, issued a press release calling for urgent action to remedy "alarming" human rights situation.⁹
10. On 29 August 2020, ahead of the International Day of the Victims of Enforced Disappearances on 30 August, the Working Group, together with the Committee on Enforced Disappearances issued a statement calling on States to continue the search for people who have been forcibly disappeared, despite the COVID-19 pandemic.¹⁰

¹ See www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25944&LangID=E.

² See www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25997&LangID=E.

³ See www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=26248&LangID=E.

⁴ See www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=26006&LangID=E.

⁵ See www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=26010&LangID=E.

⁶ See www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=26036&LangID=E.

⁷ See www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=26060&LangID=E.

⁸ See www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=26106&LangID=E.

⁹ See www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=26148&LangID=E.

¹⁰ See www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=26189&LangID=E.

11. On 1 September 2020, the Working Group, together with other special procedure mechanisms, issued a press release calling on Belarus to stop torturing detainees and bring to justice police officers humiliating and beating protesters in their custody with impunity.¹¹

12. On 4 September 2020, the Working Group, together with other special procedure mechanisms, issued a press release calling on the Pakistani authorities to end the secret detention of human rights defender Idris Khattak.¹²

13. On 21 September, on the occasion of the Working Group's annual reporting to the Human Rights Council, the Working Group issued a press release calling on the international community to strengthen cooperation to enable timely and effective investigations and prosecutions of enforced disappearances.¹³

14. On 25 September 2020, the Working Group, together with other special procedure mechanisms, issued a press release calling on Belarus to release prominent opposition leader Maria Kalesnikava, and to bring to justice those responsible for her enforced disappearance.¹⁴

¹¹ See www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=26199&LangID=E.

¹² See www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=26207&LangID=E.

¹³ See www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=26268&LangID=E.

¹⁴ See www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=26296&LangID=E.